



**REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA MULTIFASE DE
REORDENAMIENTO URBANO DE LA CEJA, FASE I
PROYECTO TRANSPORTE URBANO LA PAZ – EL
ALTO: LÍNEA PLATEADA (BO-L1079)**

**PLAN DE REASENTAMIENTO
INVOLUNTARIO**

NOVIEMBRE 2017

CONTENIDO

PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO	4
INTRODUCCIÓN	4
CONTEXTO DEL PROYECTO	5
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS DISTRITOS 1 Y 6	7
NECESIDAD DE REASENTAMIENTO	11
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y OBJETIVOS	12
PRINCIPIOS	11
DEFINICIONES	14
OBJETIVOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO	15
OBJETIVO GENERAL	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES DEL MISMO QUE REQUIEREN REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO	15
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL REASENTAMIENTO	18
CAPÍTULO II: MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	19
MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y NACIONAL APLICABLE A REASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO ECONÓMICO	19
DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS	21
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	22
CONVENIO 169 DE LA OIT	22
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS	23
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (7 DE FEBRERO DE 2009)	23
LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA (30 DE DICIEMBRE DE 1884)	23
DECRETO LEY N° 12760, CÓDIGO CIVIL (6 DE AGOSTO DE 1975)	24
DECRETO LEY N° 12760, CÓDIGO CIVIL (6 DE AGOSTO DE 1975)	24
LEY N° 031, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” (19 DE JULIO DE 2010)	24
LEY N° 165 LEY GENERAL DE TRANSPORTE (16 DE AGOSTO DE 2011)	23
LEY N° 1333, LEY DEL MEDIO AMBIENTE (27 DE ABRIL DE 1992)	25
LEY N° 530 LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO (23 DE MAYO DE 2014)	24
LEY N° 261 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFÉRICO) EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO (15 DE JULIO DE 2012)	25
LEY N° 332 (28 DE DICIEMBRE DE 2012)	26
LEY N°. 466 DE LA EMPRESA PÚBLICA (26 DE DICIEMBRE DE 2013)	26
DECRETO SUPREMO N° 1980 (23 DE ABRIL DE 2014)	26
LEY N° 630 (15 DE ENERO DE 2015)	26
LEY N° 652 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFÉRICO) EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO - SEGUNDA FASE (26 DE ENERO DE 2015)	26
LEY N° 926 SOBRE FRANJAS DE RESERVA Y SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (12 DE ABRIL 2017)	27
POLÍTICAS OPERACIONALES DEL BID	30
ANÁLISIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE NORMATIVA NACIONAL/EXPERIENCIA ACUMULADA MT Y SALVAGUARDIAS BID:	32
EXPERIENCIAS ACUMULADAS EN REASENTAMIENTO POR MI TELEFÉRICO, MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LA INDEMNIZACIÓN.	34
CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE AFECTADOS, IMPACTOS Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN	35
IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES	35

CARACTERÍSTICAS DE LOS AFECTADOS:	36
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD	37
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS VULNERABLES	37
VULNERABILIDAD	38
CAPÍTULO IV: PROCESO METODOLÓGICO	39
REGISTRO CATASTRAL Y DE TENENCIA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA.	39
PROCEDIMIENTO PARA EL AVALÚO DE BIENES Y TIERRAS.	40
PROCEDIMIENTO PARA SANEAMIENTO DE TIERRAS Y PROPIEDADES.	42
PROCEDIMIENTO PARA EXPROPIACIÓN POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA	47
1. IDENTIFICACIÓN.	48
2. NOTIFICACIÓN.	49
3. AVALÚOS.	49
4. DETERMINACIÓN DEL MONTO INDEMNIZABLE.	50
5. PAGO.	52
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARPETAS	48
LINEAMIENTOS PARA ELABORAR UNA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	48
CAPÍTULO V: COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL	49
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL REASENTAMIENTO	49
CAPÍTULO VI: RELACIONAMIENTO COMUNITARIO	51
PROCESO DE RELACIONAMIENTO Y CONSULTA CON LOS AFECTADOS	58
MECANISMOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS AFECTADOS	52
CAPÍTULO VII: MONITOREO	53
CAPÍTULO VIII: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO	55
NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	60
ANEXOS	69
ANEXO 1: ETC MT: MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LA INDEMNIZACIÓN	69
ANEXO Nº 2: PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	63
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y CENSO DE POBLACIÓN AFECTADA	64
ANÁLISIS SOCIAL	64
GRADOS DE VULNERABILIDAD	65
RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALÚO SOCIOECONÓMICO FAMILIAR (FICHA DE CAMPO)	75
CÁLCULO DE LUCRO CESANTE	75
SISTEMATIZACIÓN DEL RELEVAMIENTO DE DATOS Y AVALÚO SOCIOECONÓMICO FAMILIAR	75
DICTAMEN Y AVALÚO SOCIOECONÓMICO	75
ANEXO 3: FORMULARIO PARA RELEVAMIENTO SOCIAL DE AFECTADOS	77
ANEXO 4. PLANILLA DE CÁLCULO PARA LUCRO CESANTE.	78
ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS IMPACTOS IDENTIFICADOS	69
ANEXO 6: RESÚMENES DEL MARCO JURÍDICO DE EXPROPIACIONES DE LA EETC MT Y DE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA INDEMNIZACIÓN JUSTA DE BIENES PRIVADOS DECLARADOS DE UTILIDAD Y NECESIDAD PÚBLICA, 2015	80
ANEXO 7: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE AFECTACIONES	76

Plan de Reasentamiento Involuntario

Introducción

El presente Plan de Reasentamiento Involuntario, PRI, establece los lineamientos y procedimientos a seguir en el proceso de reasentamiento involuntario que se refiere al desplazamiento físico (reubicación o pérdida de vivienda) y al desplazamiento económico (pérdida de activos o de acceso a activos que ocasiona pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia) como resultado de la adquisición de predios para el Proyecto Transporte Urbano La Paz – El Alto: Línea Plateada cuya construcción de estaciones y emplazamientos de torres requiere la liberación de predios y/o restricciones sobre el uso de la tierra. Se entiende como medios de subsistencia a toda la gama de medios que utilizan las personas y las familias para ganarse la vida, como ingresos salariales, jornales, agricultura, comercio minorista, trueque y otros.

El Plan de Reasentamiento Involuntario se basa en la Política Operacional 710 (OP710) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) activada para el presente Proyecto porque se tiene previsto la adquisición de predios. La OP-710 fue aprobada por el Directorio en julio de 1998 y la misma busca reducir al mínimo la necesidad del reasentamiento involuntario, y obliga a elaborar un Plan de Reasentamiento en los casos en que éste sea inevitable buscando minimizar los efectos materiales y socioeconómicos directos de las actividades del reasentamiento en las zonas donde el Proyecto tendrá su ejecución. El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras o restricciones sobre el uso de la tierra que den como resultado el desplazamiento físico o económico.

El Plan de Reasentamiento se basa en la identificación preliminar de predios privados y públicos afectados por el emplazamiento de torres, la construcción de estaciones y áreas complementarias. La mayor parte de las intervenciones se ubican en áreas liberadas o públicas. Esta identificación fue realizada por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” y la Empresa Contratista Ejecutora del Proyecto la Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., TDB, sobre la base de un Estudio de Definición de Líneas (EDL), estudio que requiere algunas complementaciones pero que no significarán grandes modificaciones en la ubicación y superficie y que servirán para la preparación del Informe de Estudio de Afectación-IEA que será entregado a la EETC MT para que ésta declare, en su caso, el procedimiento de Necesidad y Utilidad Pública para un número limitado de bienes inmuebles necesarios para el Proyecto.

El Plan de Reasentamiento Involuntario, presenta los lineamientos centrales para los mecanismos de compensación (indemnización, reposición, y/o reubicación) de individuos, familias y negocios asentados y/o que realizan actividades económicas en la zona de ejecución del Proyecto. Medidas que se basan en evaluaciones técnicas y socioeconómicas que determinan el número de familias que serán compensadas o reubicadas de tal manera que el reasentamiento no sea causa de empobrecimiento, privaciones graves y prolongadas para las personas afectadas. Para ello el PRI contempla los instrumentos sociales que permitan establecer las medidas compensatorias específicas para las familias de Alta Vulnerabilidad, cuyas actividades económicas, viviendas y/o terrenos resulten afectados.

Asimismo, si bien se reconoce a la Expropiación como el acto del gobierno por medio del cual, en ejercicio de su soberanía, se apropia de derechos de propiedad de una persona o

los modifica, en los alcances de este Plan la ausencia de títulos de propiedad de la tierra y otros recursos no son un obstáculo para la compensación, ya que la OP-710 considera que se deben tomar en cuenta las necesidades de quienes no están protegidos por la ley. Igualmente, plantea que en las zonas urbanas cuyos habitantes carezcan de títulos de propiedad de sus predios, se debería reconocer los derechos de estas unidades familiares establecidas y ofrecerles otras viviendas aceptables, junto a servicios básicos, además de darles la oportunidad de obtener, con el tiempo, la escritura de propiedad correspondiente.

Finalmente el Plan de Reasentamiento se ha elaborado en conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia y la experiencia adquirida por la EETC “MT” que conducirá un proceso planificado que evitará el desalojo forzado, y las personas afectadas recibirán beneficios específicos para reponer las condiciones de vida a niveles iguales o mejores que los que tenían antes del reasentamiento, garantizando equidad y respeto a sus derechos.

Contexto del proyecto

El Proyecto está ubicado en la ciudad de El Alto que presenta una tasa anual de crecimiento poblacional de 5,1%, superior al promedio nacional de 2,4%. Pasó de 405.000 habitantes en 1992 a 846.880 habitantes el 2012 de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (Censo 2012) del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo a la misma fuente al 2016 la población estimada alcanzaría a 901.000 habitantes. Durante muchos años El Alto fue una sección municipal de la ciudad de La Paz hasta que en 1988 la Ley Nro. 1017 la elevó a rango de ciudad.

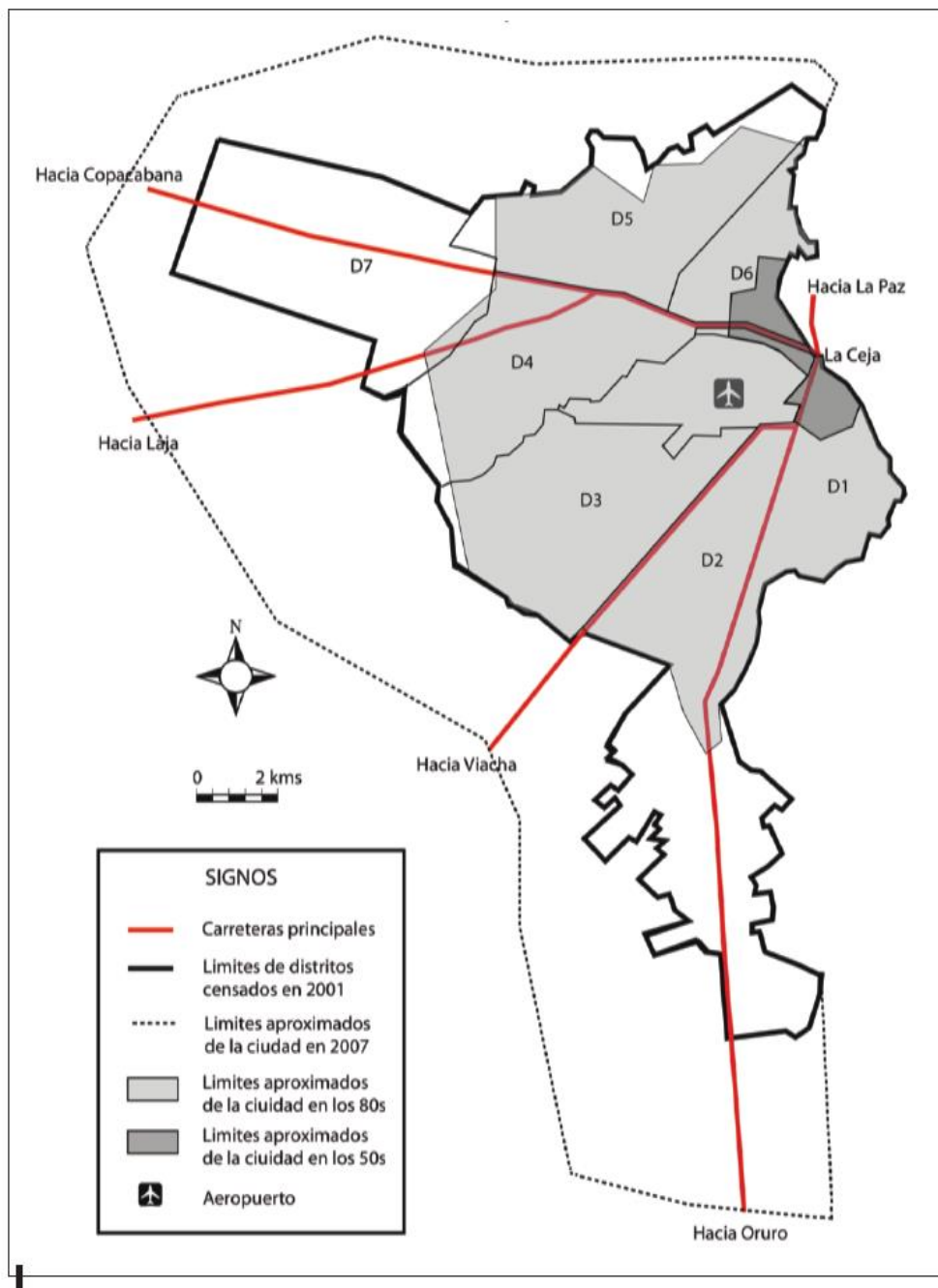
Los 14 distritos de la ciudad de El Alto conforman un abanico complejo de diversidades, contradicciones y una composición social dinámica y en transformación. Es una población relativamente joven, con un desarrollo y estructuras desiguales, por una parte, en el ‘centro’ se ubican las urbanizaciones y barrios residenciales más antiguos que cuentan con mayor dotación de servicios e infraestructura y una dinámica económica y comercial, asimismo albergan las principales oficinas públicas. Por el contrario, no sucede lo mismo con las urbanizaciones y los barrios de los distritos más pobres o de la ‘periferia’ en los que la desigualdad, en términos de ingresos, acceso a servicios y oportunidades económicas es más alta.

La población económicamente activa de El Alto, según los datos del Censo 2012, comprende a unas 379.143 personas. El principal sector es el del comercio mayorista y minorista, así como el transporte que representan el 36% de las actividades, mientras que los servicios representan el 25%. Estos datos contrastan con los datos del Censo 2001 cuando el comercio representaba el 30% de las actividades y estaba en tercer lugar, estas modificaciones inter censales muestran los cambios que se han dado en la economía del país. En cuanto al sector secundario está dominado por la construcción y representa el 9% de la fuerza laboral alteña. Los anteriores datos muestran la economía dinámica de El Alto visibilizada en el número de negocios, servicios y comercialización, pero este aumento también significa el incremento de la informalidad.

El Alto estaría compuesto por tres círculos espaciales distintos, correspondientes a la antigüedad de la implantación de los diferentes barrios y a la centrífuga dinámica urbana (POUPEAU 2015). Es en primer anillo que se encuentran los distritos 1 y 6 donde se ubican tanto las estaciones ya construidas como las que se construirán, así como el emplazamiento de las torres se darán en barrios de las urbanizaciones 16 de Julio, Villa

Dolores, Tejada Rectangular, barrios que junto a Villa Dolores y Ciudad Satélite son los más antiguos y densamente poblados.

Figura N° 1: Mapa de El Alto y representación esquematizada de sus anillos



Es en este primer anillo donde se ubica la Ceja, importante nudo urbano que concentra comercio, servicios, equipamientos educativos y culturales, así como oficinas y centros administrativos de la ciudad de El Alto, del gobierno regional y central y por el que

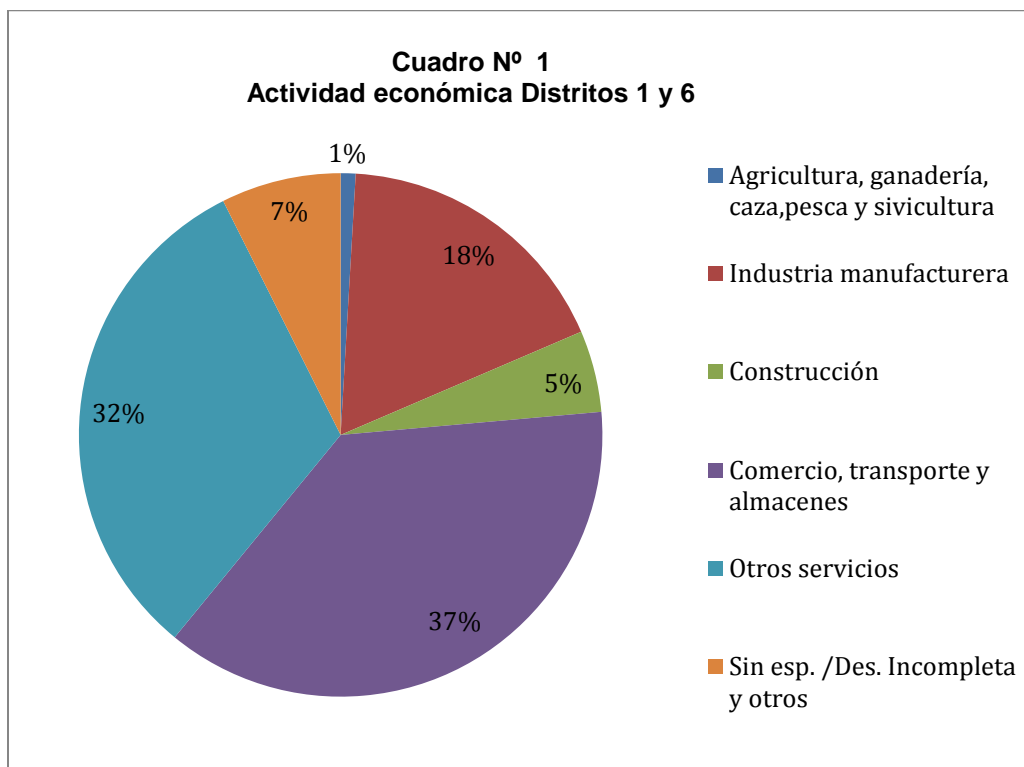
circularían, aproximadamente, 300.000 personas diariamente.

Los barrios mencionados están integrados en los distritos 1 y 6 del municipio y ocupan el centro de los tres anillos de El Alto, tal como se puede visualizar en el mapa realizado por POUPEAU que se basa en el análisis cartográfico de los datos del censo de 2001ⁱ. (Ver Figura 1). En el Distrito 1 se encuentran Villa Dolores, Tejada Rectangular, Faro Murillo y Ciudad Satélite y el Distrito 6 está integrado por la urbanización 16 de Julio que consta de 3 secciones y un anexo. Los datos poblacionales de los dos distritos muestran una población joven de migrantes de tercera generación. Porcentualmente hay más mujeres que hombres en los dos distritos. La población de mujeres alcanza a 77,882 personas mientras que los hombres son 70, 623. Esta situación puede deberse a varios factores como la longevidad (generalmente mayor en las mujeres), la proporción de población dedicada a servicios domésticos, la migración diferencial desde zonas rurales, o la migración temporal. Estos factores pueden favorecer el predominio demográfico de las mujeres (BM 2012).

Actividad económica de los Distritos 1 y 6

En relación a los rubros a los que se dedican los habitantes de los mencionados distritos se mantiene la tendencia de todo el municipio de El Alto, aunque en mayores porcentajes, lo que muestra su potencialidad pero también sus debilidades. La mayor parte de la población de los dos distritos, 37%, se dedica al comercio mayorista/minorista, al transporte y almacenamiento de mercancías. Le sigue el rubro de los servicios, 32%, frente al 18% de actividades relacionadas con la industria manufacturera. Tal como se refleja en los Cuadro

Nº 1 y el subsiguiente Cuadro Nº 2.



Elaboración propia en base a los datos del INE 2012

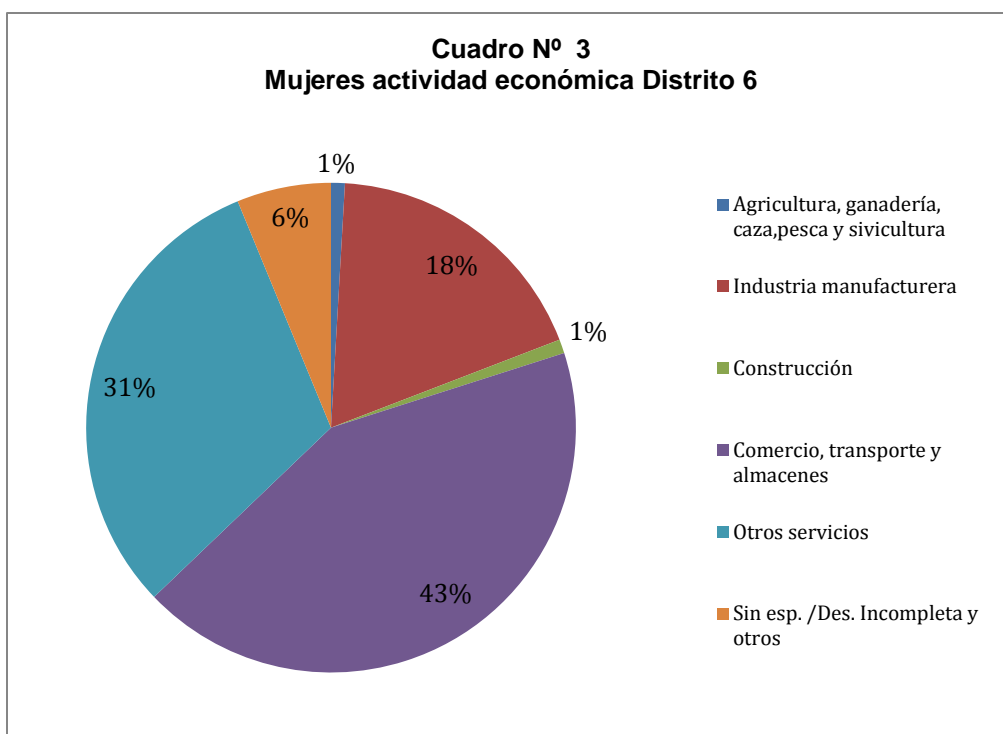
Cuadro Nº 2 POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Distritos 1 y 6			
Actividad económica	Hombres	Mujeres	Total
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura	780	427	1.207
Industria manufacturera	9.133	5.819	14.952
Construcción	3.961	503	4.464
Comercio, transporte y almacenes	15.063	16.603	31.126
Otros servicios	12.434	14.418	26.852
Sin especificar	1.283	1.305	2.588
Total	42.654	39.075	81.729

Elaboración propia en base a los datos del INE 2012

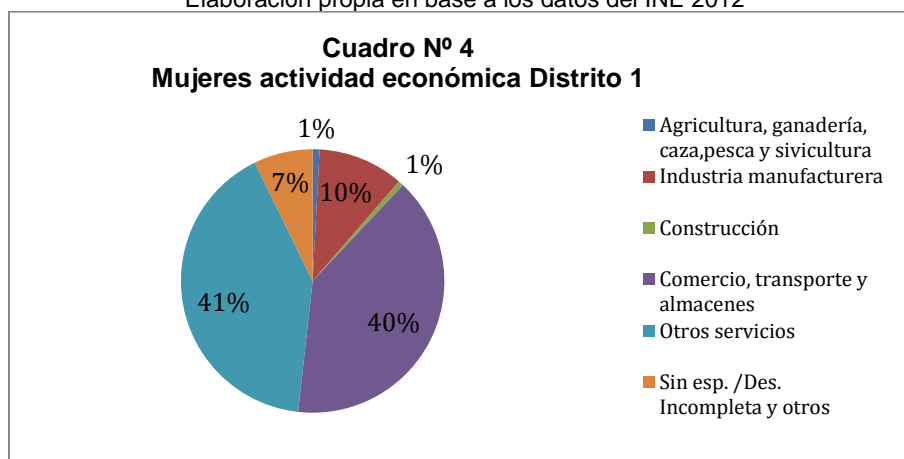
En el Distrito 6 se ubica la Feria 16 de Julio, la más grande de Bolivia y considerada la segunda feria más grande de Latinoamérica, en ella sobre una superficie de 33 hectáreas se instalan los jueves y domingos, cerca de 10.000 vendedores registrados. Se calcula que se realizan transacciones de al menos dos millones de dólares y que la visitan aproximadamente 70.000 personas.

En este Distrito 6 la principal actividad de las mujeres, 43%, está relacionada con el comercio frente al 40% de las mujeres del Distrito 1 donde se ubica la Ceja. Las mujeres dedicadas a la industria manufacturera del Distrito 6 también superan a las mujeres (18%)

del Distrito 1 (10%), empero estas últimas se ubican mayoritariamente en el sector de los servicios (41% frente al 31%). Ver al respecto el Cuadro N° 3 y el Cuadro N° 4.



Elaboración propia en base a los datos del INE 2012



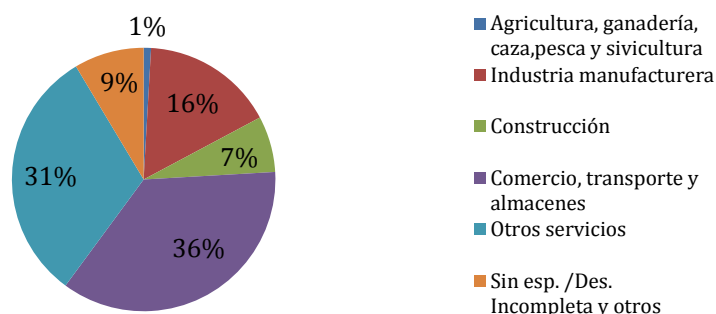
Elaboración propia en base a los datos del INE 2012

Si se compara la actividad económica de los hombres se establece que los hombres del Distrito 1, donde se encuentra La Ceja, se dedican en un 36% al comercio y transporte y el 31% a los servicios frente a los hombres del Distrito 6 (donde se ubica la Feria 16 de Julio) en menor medida, 32%, se dedican al comercio y transporte así como a los servicios, 25% y su participación en actividades manufactureras es mayor a la de los hombres del distrito

1, 24% frente al 16%. Ver al respecto los Cuadro N° 5 y N° 6.

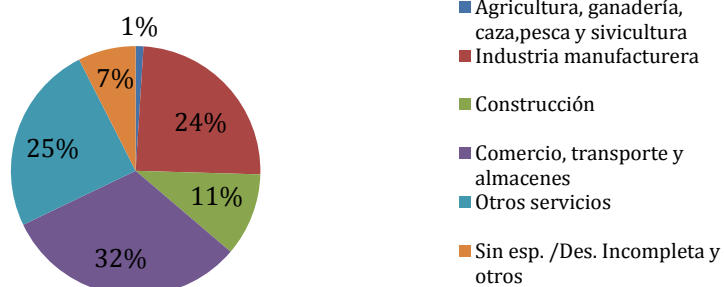
Servicios básicos distrito 1	Totales	%	Servicios básicos distrito 6	Totales	%
Total viviendas encuestadas	26.909		Total viviendas encuestadas	27.388	
Tiene energía eléctrica	25.105	93,3	Tiene energía eléctrica	25.667	93,7
Tiene Agua (Cañería de red)	24.824	92,3	Tiene Agua (Cañería de red)	25.571	93,4
Tiene alcantarillado	24.048	89,4	Tiene alcantarillado	24.361	88,9

Cuadro N° 5
Hombres actividad económica Distrito 1



Elaboración propia en base a los datos del INE 2012

Cuadro N° 6
Hombres actividad económica Distrito 6



Elaboración propia en base a los datos del INE 2012

Cuadro N° 7: Servicios básicos en los Distritos 1 y 6 de El Alto
Situación socio-cultural de los Distritos 1 y 6

Finalmente, en relación a los servicios se establece que los dos distritos tienen porcentajes casi similares y superan más del 90% para el acceso a energía eléctrica y al servicio de agua por cañería. Subsistiendo rezagos en alcantarillado. La concentración de

equipamientos en estos dos distritos es mayor al de distritos pobres o nuevos.

En cuanto a las características socioculturales establecidas en el Análisis Ambiental y Social del Proyecto se establece que: (i) las urbanizaciones que integran los Distritos 1 y 6 de la ciudad de El Alto, son las más antiguas y consolidadas de El Alto y están integradas por migrantes de segunda y tercera generación que tienen como lengua materna el castellano; asimismo su auto identificación como Aymara es significativamente baja en relación a los nuevos distritos; (ii) si bien en el Censo del 2001 un 74.25 por ciento de los alteños se definieron como Aymaras, en el Censo del 2012 sólo el 45 por ciento de la población se auto-identificó como Aymara; (iii) en los distritos 1 y 6, de influencia directa del Proyecto, los datos muestran una disminución de los índices de auto-identificación, sólo un 32,5 por ciento de la población de ambos distritos se auto identifica como Aymara; (iv) para ambos distritos la lengua materna es el castellano: en el Distrito 6, el 71, 76% de la población aprendió a hablar en castellano mientras que el 17, 76 lo hizo en Aymara; por el contrario en el Distrito 1 el 78,98% aprendió a hablar en castellano y el 10,33% en Aymara; (v) Asimismo, se han producido procesos de decantación de la cultura y destrucción del tejido social que dan lugar a modificaciones en las prácticas culturales, y elevados índices de violencia e inseguridad ciudadana.

De acuerdo a los alcances establecidos en la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (OP- 765) del BID se activa la mencionada política por existir en el área de intervención del proyecto una población significativa que se auto identifica como Aymara. Sin embargo, se considera que la misma no activa los requisitos diferenciados para el reasentamiento de comunidades indígenas establecidos en la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario, OP-710, debido a que no se reasentará a un colectivo indígena con identidad compartida y arraigo territorial.

Necesidad de reasentamiento

Por las características de ejecución del Proyecto, a través un contrato de llave en mano, la identificación definitiva de los emplazamientos de las torres y estaciones, así como los impactos por necesidad de adquisición de predios, se realizará durante la fase de ejecución del Proyecto. En esta fase se ha realizado una definición preliminar del trazado de la Línea Plateada, incluyendo el emplazamiento de torres y estaciones, a través de una aproximación satelital y una inspección en campo conjunta entre técnicos de EETC MT y la empresa Doppelmayr, encargada de la ejecución del Proyecto. Se estima que la variación en los emplazamientos de las torres será de orden menor, y que la identificación preliminar de las afectaciones por adquisición de predios tiene alto grado de confiabilidad. Sin embargo, en el caso de realizarse modificaciones a los emplazamientos por situaciones de orden técnico, y que resulten en cambios en las afectaciones prediales y en la identidad de los afectados, se actualizará el presente plan conforme los procedimientos presentados en la sección IV.

De acuerdo a la información levantada por la EETC “MT” y los resultados del levantamiento de los censos se establece que la ampliación de la estación 16 de Julio con una estructura independiente para la estación de la Línea Plateada, el emplazamiento de torres, la construcción de la estación intermedia Faro Murillo y sus accesos viales, y la construcción de la estación anexa a la Estación Mirador (Teleférico Amarillo) en Ciudad Satélite provocan afectaciones a particulares y a predios particulares y un predio privado.

La construcción de las tres estaciones, así como los accesos viales y el emplazamiento de

21 torres afectan a 61 puestos comerciales en espacio público; 5 viviendas de forma total; 4 inquilinos; 4 tiendas y negocios; 3 predios privados de forma parcial; 2 casetas de *Yatiris (especialistas rituales aymaras)*. La mayoría de las instalaciones se emplazan en predios públicos. El proceso de reasentamiento y compensación de los afectados cumplirá con los requerimientos y alcances de la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710). El proceso de expropiación se inició en enero 2017 de acuerdo a los procedimientos establecidos por la EETC MT, empero el PRI incluye medidas de compensación de acuerdo a la mencionada política operacional.

Para la construcción de la estación del Teleférico Plateado adyacente a la terminal Mirador del Teleférico Amarillo, el proyecto analizó 3 alternativas constructivas y se adoptó la Alternativa 1 que es la que presenta menor impacto ambiental y paisajístico. Se evita afectaciones a la propiedad privada y hay un menor congestionamiento de peatones y vehículos de transporte público. Sólo se afectan algunos terrenos que pertenecen a la Policía Boliviana es decir de otra repartición del Estado y algunos árboles de eucaliptus que fueron introducidos desde Australia. Esta opción ya cuenta con la Categorización de la Autoridad Ambiental Departamental. El PRI se basa en esta alternativa.

De acuerdo a la anterior información se establece que se requiere un número limitado de expropiaciones parciales ya que la mayor parte de las edificaciones y emplazamiento de torres se ubican en predios públicos o en áreas liberadas. Si bien se construirán torres en aceras que son considerados espacios públicos, en el emplazamiento de las mismas se evitará la pérdida de iluminación natural y vista a la calle y no se limitará el acceso a viviendas o garajes.

Capítulo I: Principios, definiciones y objetivos

Principios

El objetivo general del reasentamiento consiste en mejorar la calidad de vida, la seguridad física, la capacidad productiva y los ingresos de las poblaciones afectadas o, como mínimo, dejarlos, dentro de un período razonable, en el mismo nivel que tenían antes. Los principios que orientan el PRI son los siguientes:

Evitar o minimizar los desplazamientos de población: Hay que evitar el reasentamiento cada vez que sea posible. Antes de adoptar las decisiones fundamentales hay que estudiar otras opciones y considerar lugares alternativos para los cuales no se necesite un reasentamiento o se necesite uno de menor magnitud. Cuando el reasentamiento sea inevitable, hay que tratar de reducir el número de personas afectadas por el proyecto.

Asegurar la participación de la comunidad: La participación de la comunidad es esencial para que el plan de reasentamiento culmine con éxito. La participación facilita el suministro de información y sirve para que el plan de reasentamiento tenga en cuenta las necesidades y las aspiraciones de la población afectada. Promueve una mayor transparencia y alienta a la comunidad a tomar un papel más activo en el desarrollo económico y en el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura local. Un proceso efectivo de consulta también es indispensable para no generar expectativas excesivas ni especulaciones.

Considerar el reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible: El

reasentamiento debe incluir, como mínimo, una compensación completa por la pérdida de bienes e ingresos. Para lograr un verdadero desarrollo sostenible, las medidas de reasentamiento deben incluir el desarrollo económico, la infraestructura y los servicios y no limitarse únicamente a las medidas de mitigación.

Definir los criterios para la compensación: Se necesitan definir criterios de elegibilidad para determinar el derecho a la reposición de tierras o vivienda, la indemnización en dinero, o la rehabilitación económica y otros beneficios. Las definiciones deben comprender conceptos básicos como qué constituye la “unidad familiar”, así como las fechas en que se han de tasar las pérdidas.

Compensar según el costo de reposición: Las personas desplazadas no deberían subvencionar el proyecto principal por recibir una compensación injusta y, por lo tanto, deben recibir el costo íntegro de reposición de sus bienes. La indemnización únicamente en dinero no constituye por lo general la mejor solución. Si fuese preciso recurrir a ella, habría que ofrecer también apoyo para cerciorarse de que es utilizada para la reposición de los bienes. En este proceso deberían participar tanto mujeres como hombres. Es posible que los hogares desplazados necesiten también ayuda para transportar sus posesiones, su equipo y su ganado, así como alojamiento temporal y apoyo en el lugar en que se instalen.

Compensar la pérdida de derechos consuetudinarios: La inexistencia de títulos de propiedad de la tierra o de otros recursos no debe constituir un obstáculo para la compensación, aunque en muchos países las normas jurídicas vigentes para la expropiación y la indemnización únicamente son aplicables a quienes tienen plenos derechos de propiedad respecto de la tierra y la vivienda. Los planes de reasentamiento deberían complementar las disposiciones legales vigentes y, concretamente, tener en cuenta las necesidades de quienes no están protegidos por la ley.

Crear oportunidades económicas para la población desplazada: En las zonas urbanas, los PRI deben asegurarse de que las personas desplazadas tengan oportunidades de empleo y esto reviste particular importancia cuando se desplazan trabajadores del sector informal de una ciudad o suburbio.

Proporcionar un nivel aceptable de vivienda y servicios: El plan de reasentamiento debe servir de oportunidad para mejorar la calidad de la vivienda y la prestación de servicios. Las opciones en cuanto a la vivienda pueden incluir la construcción de unidades completas, el suministro de unidades básicas o lotes con servicios básicos. Como alternativa, se puede prestar asistencia a las familias para que repongan su vivienda utilizando la indemnización que perciben como pago total o parcial si la vivienda es de calidad considerablemente superior.

Tener en cuenta las cuestiones de seguridad: Un reasentamiento mal planificado causa pobreza e inseguridad y sirve de terreno fértil para la delincuencia organizada, o el tráfico de drogas

Asimismo, en el marco de la Constitución Política del Estado, CPE, del Estado Plurinacional de Bolivia que contiene valores y principios fundamentales para el reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales de los bolivianos, el presente Plan de Reasentamiento asumirá los siguientes principios transversales:

Respeto a las diferencias: Toda familia o actividad económica identificada en el

diagnóstico socioeconómico, recibirá una respuesta acorde al impacto que le fue identificado, es decir que la restitución deberá ser en condiciones iguales o mejores.

Equidad: Las soluciones de reasentamiento deben ser pertinentes a los impactos causados por el desplazamiento involuntario. Deben tener en cuenta tanto la diversidad cultural como la heterogeneidad socioeconómica de los pobladores para establecer acciones diferenciales en los temas en los que se identifiquen vulnerabilidades, incluyendo las de género y las generacionales.

Celeridad: Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con los reasentamientos, asignarán los recursos físicos, profesionales, administrativos y financieros necesarios para su ejecución, en el tiempo previsto.

Definiciones

Con la finalidad de generar una mejor comprensión de los objetivos y alcances del Plan de Reasentamiento se presentan, a continuación, las definiciones que se aplican al mismo, en el marco de la OP 710 del BID.

Plan de reasentamiento involuntario: Es el documento en el cual se establece el proceso o las acciones que permitirán apoyar a las personas afectadas, con la finalidad de restablecer los niveles de vida previos al traslado.

Compensación: Pago en dinero o especie al que tienen derecho las personas afectadas según lo dispuesto por normas o leyes del gobierno.

Efectos del proyecto: Los efectos materiales y socioeconómicos, directos e indirectos, que tiene el proyecto en su zona de ejecución.

Efectos del reasentamiento: Los efectos materiales y socioeconómicos directos de las actividades de reasentamiento en las zonas del proyecto y en las áreas donde reside la población de acogida.

Expropiación: Acto del gobierno por medio del cual, en ejercicio de su soberanía, se apropia de derechos de propiedad de una persona o los modifica.

Grupos vulnerables: Distintos grupos de personas que puedan sufrir de forma desproporcionada debido a actividades relacionadas con el proyecto.

Fecha de corte: Fecha límite de identificación de personas y familias que resultarán impactadas y a partir de la cual ya no se considerarán a nuevos afectados; corresponde a la fecha en que se concluye el censo sobre condiciones socioeconómicas de la población, así como, con la precisión del estado de edificaciones u otros que serán comprometidos como consecuencia de la obra pública.

Indemnización: El pago de una compensación por pérdidas o daños sufridos.

Mitigación: Compensación a las comunidades afectadas por las pérdidas sufridas, como consecuencia de un proyecto financiado por el Banco.

Persona afectada: Persona que resulta afectada por la pérdida de su lugar de residencia,

de los medios que le proporcionan la subsistencia, o de las fuentes de trabajo y/o ingresos.

Población afectada: Las personas afectadas directamente por actividades relacionadas con un proyecto a través de la pérdida del empleo, la vivienda, tierras u otros activos.

Reasentamiento: El proceso completo de traslado y rehabilitación causado por actividades relacionadas con un proyecto.

Rehabilitación: El restablecimiento de medios de subsistencia, condiciones de vida y sistemas sociales.

Traslado: El desplazamiento de personas, activos e infraestructura pública.

Zona del proyecto: Zonas situadas dentro de las áreas de construcción del proyecto o adyacentes a éstas, que son modificadas por el proyecto (por ejemplo formación de embalses, creación de zonas de riego, derechos de paso para proyectos de infraestructura).

Objetivos del plan de reasentamiento involuntario

Objetivo general

El objetivo general del plan de reasentamiento es prevenir y mitigar los impactos sociales y económicos negativos por el reasentamiento involuntario de un número limitado de personas por las ampliaciones de las estaciones 16 de Julio y Mirador y por la construcción de torres debido a la ejecución de la construcción de la Línea Plateada de teleférico que conectará las zonas Norte y Sur de la ciudad de El Alto. El Plan se ejecutará en concordancia con la Política Operacional (OP 710) del BID, la legislación nacional y los criterios de diseño aplicables al Proyecto.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente Plan son:

1. Definir principios y criterios para identificar, valorar y compensar los impactos socio-económicos causados por la construcción de la Línea Plateada.
2. Determinar los procedimientos que serán utilizados para el diseño e implementación del Plan de Reasentamiento.
3. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a las familias afectadas durante el proceso de reasentamiento para que alcancen iguales o mejores condiciones de vida.
4. Proponer procedimientos que fortalezcan la gestión de expropiación de inmuebles y restablecimiento de actividades económicas afectadas cuando sea necesario.

Descripción del proyecto y actividades del mismo que requieren reasentamiento involuntario

La Línea Plateada hace parte de la propuesta de la Red de Integración Metropolitana (RIM) y busca contribuir a solucionar los problemas de movilidad en el Área Metropolitana de La Paz y El Alto, buscando la complementariedad entre todos los modos de transporte, a través de las estaciones que funcionarán como intercambiadores modales y en función de un anillo

articulador, permitiendo reducir tiempos de viaje, costos para transportarse, pero fundamentalmente promoviendo una accesibilidad eficiente, equitativa y segura en beneficio de las usuarias y usuarios.

La RIM, no solamente incluye a las Líneas del Teleférico, sino busca la complementariedad con otros medios de transporte, incidiendo en un sistema integrado de transporte, que consiste en complementarse con las líneas troncales, líneas ramales, estaciones: nodo, Intermedia y final, rutas alimentadoras y rutas dedicadas, mismas que forman el anillo de integración del Sistema Integrado de Transporte (SIT), como se presenta en la siguiente imagen:

Figura N° 2. Red de integración metropolitana (RIM)



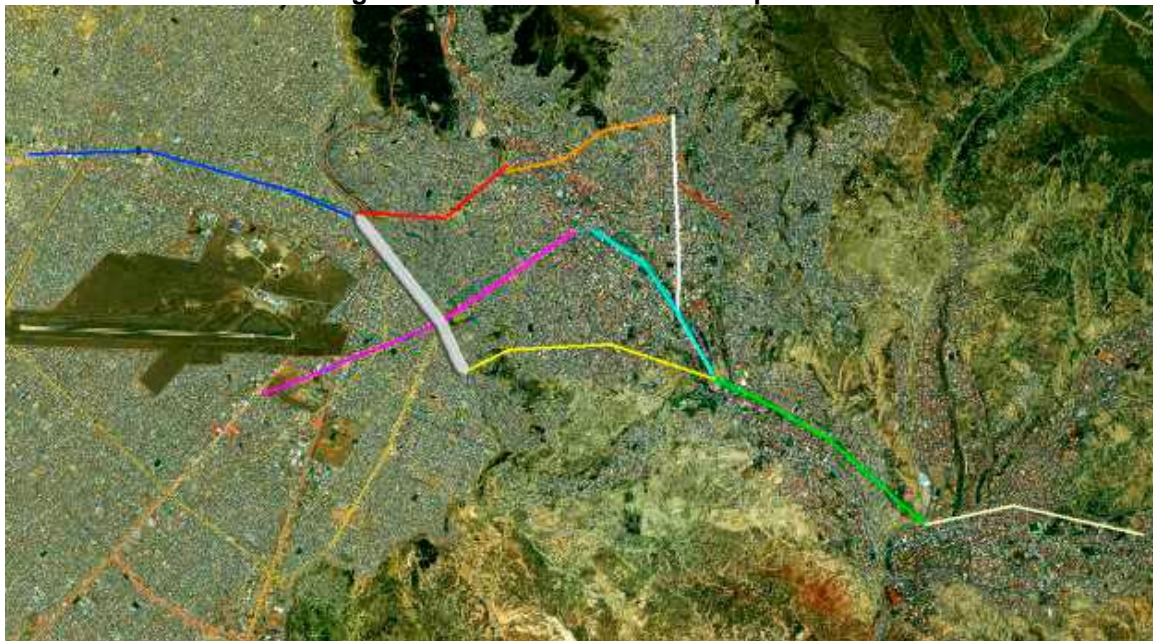
Fuente: ETTC-MT

El Proyecto de construcción de la Línea Plateada (LP) se propone la construcción de una línea de teleférico que conecte la zona norte de El Alto, a la altura de la 16 de julio, sobrevolando por la Ceja y conectándose con la zona Sur de El Alto hasta ciudad Satélite. Esta línea será parte de la Red de Integración Metropolitana (RIM), que contará con 10 líneas de teleférico, y está siendo implementada en dos fases. En la primera fase fueron construidas tres líneas (Roja, Amarilla y Verde) que ya se encuentran en operación. En la segunda hay una línea en funcionamiento (Azul), cinco líneas que están actualmente en construcción (Blanca, Café, Naranja, Morada, Dorada) y dos en planificación (Plateada y Celeste), en ella se incluye el financiamiento para la construcción de la LP como nueva línea. La construcción y operación de las líneas de teleférico son responsabilidad de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (EETC MT).

La Línea Plateada tendrá una longitud de 2.61 kilómetros que se realizarán en 8,7 minutos. Tendrá la capacidad de transportar 3 mil pasajeros – hora por sentido, durante 17 horas por día. Conectará con estaciones de las Líneas Roja, Azul (16 de Julio), Morada (Faro Murillo) y Amarilla (Mirador). La Línea Plateada inicia en terrenos adyacentes a la Estación 16 de Julio (Línea Roja), por lo que se conecta con la Línea Roja y Azul al norte, con una estación intermedia en la estación Faro Murillo con una interconexión con la Línea Morada (Estación E-M2 Faro Murillo) y la estación terminal en la estación Mirador (Línea Amarilla) al Sur por

lo que se conectará con la Línea Amarilla

Figura N° 3. Ubicación de la línea plateada



Fuente: ETTC-MT

El trazado sigue en su mayor parte la ceja de la ladera que divide geográficamente la ciudad de El Alto con ciudad de La Paz. La construcción de estaciones y 18 torres se ubican en barrios de los distritos 1 y 6 del Gobierno Municipal de El Alto. Empero, el emplazamiento de 3 torres se ubican en 2 barrios del Macro Distrito Max Paredes del Gobierno Municipal de La Paz.

La Línea Plateada permitirá reducir tiempos de viaje, costos para transportarse, además de promover una accesibilidad eficiente, equitativa y segura en beneficio de las usuarias y usuarios. Ofrecerá una capacidad máxima de movilización diaria de pasajeros, que se encuentra en el orden de los 102.000 pax/día (17 horas de funcionamiento diario) con una vida útil estimada de 40 años, mismo que impacta altamente en la movilidad urbana global de la ciudad, producto de la intervención urbana realizada.

Con esta línea se cerrará el anillo de integración de la Red de Integración Metropolitana (RIM) y su implementación generará la vinculación de las diversas zonas de las ciudades de La Paz y El Alto a través de las líneas en operación de la Fase I y las que están en plena ejecución de la Fase II. Las características de la Línea Plateada se presentan en el siguiente

cuadro:

Cuadro N° 8. Características de la línea plateada

Características	Unidad	Descripción
Estación de salida		Estación 16 de Julio
Estación de llegada		Estación Mirador
Longitud	Km	2,7
Número de Estaciones Terminales		2
Número de Estaciones Intermedias		1
Tiempo de viaje estimado	min	9,75
Capacidad Estimada	pax/hora/sentido	3.000
Horas de funcionamiento	h/d	17
Pasajeros por Cabina		10
Número estimado de cabinas		Aprox. 123
Número estimado de torres		Aprox. 20

Fuente: EETC - MT

Análisis de Alternativas para reducir el reasentamiento

Para limitar el número de afectaciones y evitar la expropiación y adquisición de predios se ha optado por el emplazamiento de las torres en predios públicos, para ello la EETC MT cuenta con la Ley N° 652, para la Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase (26 de enero de 2015). Por medio de esta ley la EETC MT puede obtener transferencias, a título gratuito, de predios públicos, en efecto el artículo 5 instituye que se autoriza a las entidades públicas a la transferencia a título gratuito y entrega de las áreas que hayan sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el mencionado proyecto. Podrían darse afectaciones menores a alguna edificación de estos predios.

De esta forma de las 3 estaciones y 21 torres que se construirán, la mayoría se realizarán en predios públicos, aceras y espacios públicos. La identificación de los futuros emplazamientos fue realizada por la EETC MT y la Empresa Contratista Ejecutora del Proyecto la Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., TDB, sobre la base de un Estudio de Definición de Líneas (EDL), estudio que partió de la necesidad de minimizar las afectaciones a las viviendas y que puede requerir algunas complementaciones pero que no significarán grandes modificaciones en la ubicación y superficie establecida.

Para la construcción de las estaciones también se han analizado las medidas para

minimizar las afectaciones.

Estación 16 de Julio: Las características de la Estación serán las siguientes:

- Tendrá conectividad con la estación de la Línea Azul y Línea Roja
- Disponibilidad de espacio tanto para área del edificio y áreas complementarias
- Proximidad con la Av. Panorámica, vía de 1er nivel de la ciudad de El Alto.
- La estación se construye en áreas liberadas.
- En el sector se requiere emplazar 6 torres que afectan predios públicos y privados.

Figura N° 4. Estación 16 de Julio

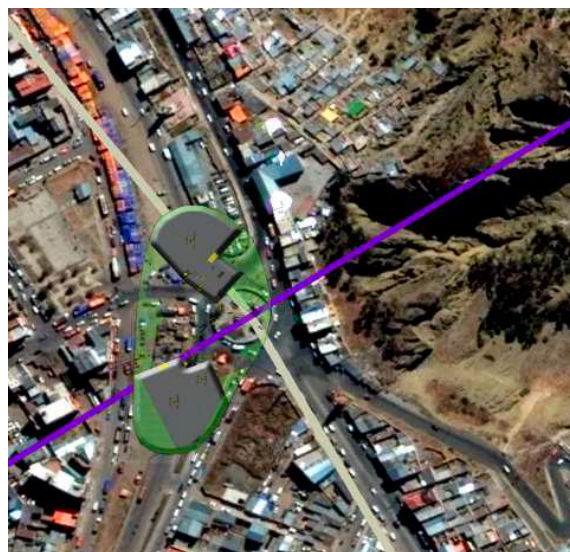


Fuente: EETC – MT

Estación Faro Murillo: Las características de la Estación serán las siguientes:

- Conectividad con la estación 16 de Julio y estación Mirador.
- Disponibilidad de espacio tanto para área del edificio y áreas complementarias.
- Proximidad con la Av. Cívica, vía de 1er orden.
- Se encuentra en proceso de construcción.

Figura N° 5. Estación Faro Murillo



Fuente: EETC – MT

Estación Mirador: Las características de la Estación serán las siguientes:

- Conectividad con la estación Faro Murillo.
- Disponibilidad de espacio tanto para área del edificio y áreas complementarias.
- Proximidad con la Panorámica Sur, vía de 1er orden.

Se evaluaron tres alternativas, el Plan de Reasentamiento Involuntario asume la opción 1 para el emplazamiento de la estación de la Línea Plateada conexas a la estación Mirador de la línea Amarilla ya que no se requiere la expropiación de ningún inmueble.

**Figura N° 6. Estación Mirador
OPCIÓN 1**



Fuente: EETC – MT

Capítulo II: Marco regulatorio nacional e internacional

Marco legal internacional y nacional aplicable a reasentamiento y desplazamiento

económico

El marco jurídico aplicado en el presente plan está constituido por la normativa internacional y nacional, por leyes, políticas, decretos y reglamentos pertinentes a las actividades de reasentamiento e indemnización relacionados específicamente con el proyecto; normativa que debe ejecutarse en el marco de lo dispuesto por el marco legal vigente y los alcances de la OP 710.

NORMAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON RELACIÓN A REASENTAMIENTOS INVOLUNTARIOS

En el ámbito internacional existe una amplia normativa enmarcada en la defensa de los derechos humanos de las personas y colectividades que por diversas causas sufren o sufrieron desplazamientos involuntarios, éstas pueden ser causadas por conflictos sociales y armados, cambio de uso del suelo, pérdida de oportunidades de trabajo, construcción de nuevas obras, etc. Y estas situaciones impactan en mayor medida a grupos minoritarios, a poblaciones en pobreza y con alto grado de vulnerabilidad.

El derecho internacional promueve normas que prohíben el traslado involuntario y forzoso ya que este tiende a incrementar la pobreza y vulnerabilidad de los hogares afectados. Por ende, la mayoría de los Estados han aceptado el establecimiento de garantías mínimas para el cumplimiento del respeto a la dignidad humana, la preservación de ecosistemas estratégicos para lograr un ejercicio de un orden justo en el desplazamiento. De estos Acuerdos Internacionales vale el resaltar los siguientes:

- ⇒ La Declaración de los Derechos Humanos de Naciones (ONU) 1948, Artículos 17, 22, y 25.
- ⇒ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), 1976 , preámbulo.
- ⇒ El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (ONU) , 1976 Art. 17 inciso 1.
- ⇒ La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica 1972. Organización de Estados Americanos (OEA).

Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Esta Declaración define los principios que garantizan los derechos de las personas desplazadas. Las normas que protegen los derechos de afectados por los desplazamientos involuntarios señalan:

- Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra reasentamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual (Principio 6).
- Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos arbitrarios en caso de proyectos en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial (Principio 6).
- Antes de decidir el desplazamiento de personas las autoridades competentes se

asegurarán que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo.

- Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos (Principio 7).
- Las autoridades responsables del desplazamiento se aseguran en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y que no se separen a los miembros de la misma familia (Principio 7).
- Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado de los desplazados (Principio 7).
- Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas en particular las mujeres en la planificación y gestión de su reasentamiento (Principio 7).
- El desplazamiento no se llevará a cabo de tal manera que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad, y seguridad de los afectados (Principio 8).
- Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros reasentados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y reasentamiento (Principio 7).

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, aprobada el 7 de septiembre del 2007, ha sido reconocida por el Estado boliviano mediante la Ley N° 3760, promulgada el 7 de Noviembre de 2007, establece en su artículo 23 que los pueblos indígenas de Bolivia tienen derecho a participar activamente en la adopción de decisiones que afecten a sus derechos, debiendo determinar y elaborar los programas de desarrollo económico y social que les conciernan, conjuntamente con las entidades públicas y privadas que realicen estos proyectos y/o programas.
- En los artículos 8, 10 18, 20, 23, 26, 27, 28 y 32 se abordan temas de las obligaciones de los Estados, la necesidad de concertar cualquier desplazamiento de las poblaciones, el derecho de los pueblos a participar en la toma de decisiones, compensación justa en caso de afectación, determinar prioridades y estrategias para su desarrollo y el derecho a la tierra, reconocimiento a sus leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras.

Convenio 169 de la OIT

El Convenio 169 de la OIT (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes) firmado y aprobado mediante Ley de la República en 1991, tienen como objetivo el de asegurar que los miembros de estos pueblos gocen de igualdad de derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, respetando su identidad social, cultural, costumbres, tradiciones y sus instituciones. Esto

incluye sus derechos consuetudinarios sobre territorios ancestrales y sobre la tierra.

Organización de Estados Americanos

La Convención de San José de Costa Rica de la Organización de Estados Americanos establece:

- Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar el uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley (Artículo 21).
- Aprobado y ratificado por el Estado boliviano mediante Ley N° 1430 de 11 de febrero de 1993.

NORMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009)

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia consagra a la propiedad privada como un derecho fundamental, estableciendo en los párrafos I y II del artículo 56 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social, garantizando que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo; pero el ejercicio a la propiedad privada no es ilimitado, al contrario tiene ciertas restricciones de orden legal, en ese sentido el artículo 57 de la nombrada norma suprema establece como límite la expropiación que se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión.

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria.

Por otro lado, los numerales 11 y 26 del párrafo II del artículo 298 de la norma referida, determinan que entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado, están las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado y la expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública; conforme al procedimiento establecido por ley.

Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública (30 de diciembre de 1884)

Se constituye en la norma primigenia de este tipo de procedimientos, misma que en su artículo 1, establece que dado que el derecho de propiedad es inviolable no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, a ceder o enajenar su propiedad para obras de interés público, sin la existencia de los siguientes

requisitos:

1. Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecutarla;
2. Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública;
3. Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse;
4. Pago del precio de la indemnización.

Por otro lado, el artículo 25 de la referida norma dispone que, una vez realizado el pago de la indemnización, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna autoridad o persona particular podrá obstaculizar la ejecución de la obra.

Decreto Ley N° 12760, Código Civil (6 de agosto de 1975)

De la misma forma, el artículo 105 del Código Civil, señala que: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo.”; siguiendo la misma línea, el párrafo I del artículo 108 estipula que: “La expropiación sólo procede con pago de una justa y previa indemnización, en los casos siguientes: 1) Por causa de utilidad pública, 2) Cuando la propiedad no cumple una función social”. El párrafo II, señala que: “La utilidad pública y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación”.

Decreto Ley N° 12760, Código Civil (6 de agosto de 1975)

De la misma forma, el artículo 105 del Código Civil, señala que: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo.”; siguiendo la misma línea, el párrafo I del artículo 108 estipula que: “La expropiación sólo procede con pago de una justa y previa indemnización, en los casos siguientes: 1) Por causa de utilidad pública, 2) Cuando la propiedad no cumple una función social”. El párrafo II, señala que: “La utilidad pública y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación”.

NORMAS NACIONALES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bólvarez” (19 de julio de 2010)

Con relación a transportes el Artículo 96 señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 32, Párrafo II del Artículo 298, de la Constitución Política del Estado el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 1) Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la infraestructura en todas las modalidades de transporte. 2) Proponer iniciativas normativas y ejercer y ejecutar mecanismos de financiamiento para proyectos en el sector.

Asimismo, establece las competencias de todos los niveles del Estado, entre los que se

incluyen las competencias en materia medio ambiental, que incluyen la elaboración, reglamentación y ejecución de políticas, regímenes de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental y política de cambio climático, para el Nivel Central y aspectos específicos para cada uno de los otros niveles.

Ley Nº 165 Ley General de Transporte (16 de agosto de 2011)

El párrafo I del artículo 10 de la Ley dispone que el Sistema de Transporte Integral, llegue efectivamente a toda la población del país articulándola al desarrollo social, productivo y social.

Asimismo, el artículo 67 declara de necesidad y utilidad pública toda obra de infraestructura vial, instalaciones de terminales terrestres, aeroportuarias, puertos, instalaciones, estaciones, vías férreas y derechos de vía, destinada al servicio público, debiendo gozar prioritariamente de todos los privilegios que las leyes conceden para ese caso; contando con preferencias para la adquisición y el acceso a los componentes y materiales necesarios para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.

Ley Nº 1333, Ley del Medio Ambiente (27 de abril de 1992)

El propósito de la ley es la protección y conservación de los recursos naturales regulando la actividad humana con relación a la naturaleza, y promoviendo el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la población. Brinda el marco legal de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del país, estableciendo los mecanismos de la planificación ambiental y estudios de impacto ambiental, los medios de control y seguimiento de la calidad ambiental, el manejo integral y sostenible de los recursos naturales.

La Ley determina las características, competencias, normatividad, deberes y obligaciones relativas a los recursos: agua, aire y atmósfera, suelo, bosques y tierras forestales, flora y fauna silvestre, recursos hidrobiológicos y Áreas Protegidas. Cualquier obra, proyecto o actividad que por sus características requiera de EEIA, con carácter previo a su inicio, deberá contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental determinada por los organismos sectoriales competentes.

Ley Nº 530 Ley del Patrimonio Cultural Boliviano (23 de mayo de 2014)

La ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.

LEYES Y DECRETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE

Ley Nº 261 Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto (15 de julio de 2012)

Se declara de interés del nivel central del Estado la construcción, implementación y

administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y Alto. Y el artículo 4 también declara de necesidad y utilidad pública las expropiaciones que sean necesarias para la implementación del Sistema de Transporte.

Ley N° 332 (28 de diciembre de 2012)

De forma posterior, por esta ley se declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles, para el Proyecto “Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”; y se establece el procedimiento aplicable.

Ley N°. 466 de la Empresa Pública (26 de diciembre de 2013)

Se establece el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de todo el pueblo boliviano.

Decreto Supremo N° 1980 (23 de abril de 2014)

Mediante este decreto se crea la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, con tipología de Empresa Estatal, carácter estratégico, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector. Por otro lado, la Disposición Final Única señala que asume competencia, derechos y obligaciones emergentes de los procesos de contratación así como de los contratos de obras, bienes, servicios generales y servicios de Consultoría suscritos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Ley N° 630 (15 de enero de 2015)

Posteriormente, se promulga esta la Ley cuyo parágrafo II, artículo 1, otorga a la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” la facultad de dar continuidad a los procedimientos de expropiación y regularización del derecho propietario, iniciados por el Ministerio, en el marco de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012. De igual forma, el parágrafo III le otorga facultades para iniciar procedimientos de expropiación hasta el pago a los titulares, ya sea de manera directa o través de la autoridad jurisdiccional, y de regularizar el derecho de propiedad a su favor.

Ley N° 652 Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase (26 de enero de 2015)

El artículo 2 declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de los bienes inmuebles que sean identificados como útiles y necesarios por la EETC MT para la construcción e implementación del STC en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase; por su parte el artículo 4 dispone que en los Procedimientos de Expropiación se aplicará lo previsto por el artículo 1 de la Ley N° 261 de 15 de julio de 2012 y artículo 3 de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012. En relación a las transferencias a título gratuito, el artículo 5 instituye que se autoriza a las entidades públicas a la transferencia a título gratuito y entrega de las áreas que hayan sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el

mencionado proyecto.

Ley N° 926 sobre Franjas de Reserva y Seguridad del Sistema de Transporte por Cable (12 de Abril 2017)

La Ley establece los parámetros para la determinación de las franjas de reserva y seguridad, para la planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y seguridad del Sistema de Transporte por Cable – STC. El Artículo 5 determina que la franja de reserva necesaria para el STC será de hasta treinta y cinco (35) metros a cada lado del eje del trazado de las líneas, identificado en el Estudio de Definición de Líneas. El Artículo 6 señala que constituida la franja de seguridad, no corresponderá compensación alguna por su uso. Por razones de seguridad o mantenimiento, la entidad o empresa a cargo de la operación del STC quedará autorizada a ocupar temporalmente las áreas de influencia, de los predios públicos o privados, indispensables, ubicados por debajo o alrededor de la franja de seguridad para los servicios e instalaciones necesarias, hasta un plazo de treinta (30) días calendario. Para tal efecto, deberá comunicar a los propietarios de los predios públicos o privados, la necesidad de ocupación de los predios con un tiempo anticipado de quince (15) días calendario. Finalmente, El operador del STC deberá poner en conocimiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, los trazados de las líneas proyectadas en el Estudio de Definición de Líneas y los límites fijados para las franjas de reserva y seguridad, con el fin de que las construcciones, plantaciones, estructuras, edificaciones e instalaciones, sea de carácter público, privado o mixto, no tengan una altura mayor que la limitada en dicha superficie, ni constituyan un riesgo para el STC.

OTRAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES

Administración central

Se sintetiza las atribuciones de los ministerios relacionados con la EETC MT.

Ministerio de Planificación del Desarrollo

Entre sus atribuciones principales se establece:

- Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y Entidades Descentralizadas y Desconcentradas correspondientes.
- Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado Plurinacional como actor económico, productivo y financiero para la redistribución equitativa de la riqueza, excedentes, ingresos y oportunidades.
- Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y programas comprendidos en el Sistema de Planificación Integral Estatal para el desarrollo, tanto en sus enfoques de innovación, equidad y armonía con la naturaleza como en sus

impactos y resultados.

- Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el desarrollo.
- Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas.

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Sus atribuciones, en relación a transporte, son:

- Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas del Plan General de Desarrollo Económico Social en coordinación con las Entidades Territoriales del Estado, en el área de su competencia, así como su respectivo seguimiento.
- Proponer, dirigir y ejecutar las políticas sectoriales de desarrollo económico y social en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Formular y elaborar normas de catastro urbano, en el marco de la planificación de ordenamiento territorial, en coordinación con los gobiernos autónomos.
- Formular, promover, coordinar y ejecutar políticas y normas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y otros, cuando el alcance abarque más de un departamento y/o tenga carácter internacional.
- Garantizar la provisión de servicios de las áreas de su competencia en el marco de los principios de universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad y equidad.
- Impulsar y coordinar la participación de la sociedad civil organizada, para efectivizar el control social y generar mecanismos de transparencia en la gestión pública, dentro de las áreas de su competencia.
- Proponer la creación de empresas públicas estratégicas, en el área de su competencia.

Gobiernos Departamentales y Municipales

Tanto los Gobiernos Departamentales como los Gobiernos Municipales tienen competencias exclusivas en el área de transporte de acuerdo a la Constitución Política del Estado, CPE.

- 1) De acuerdo al Numeral 9, Parágrafo I del Artículo 300, los gobiernos departamentales tienen las siguientes: 1) Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura vial interprovincial e intermunicipal. 2) Planificar y promover el desarrollo del transporte interprovincial por carretera, ferrocarril, fluvial, y otros medios, en el departamento. 3.) Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance interprovincial e intermunicipal. 4) Regular el

servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.

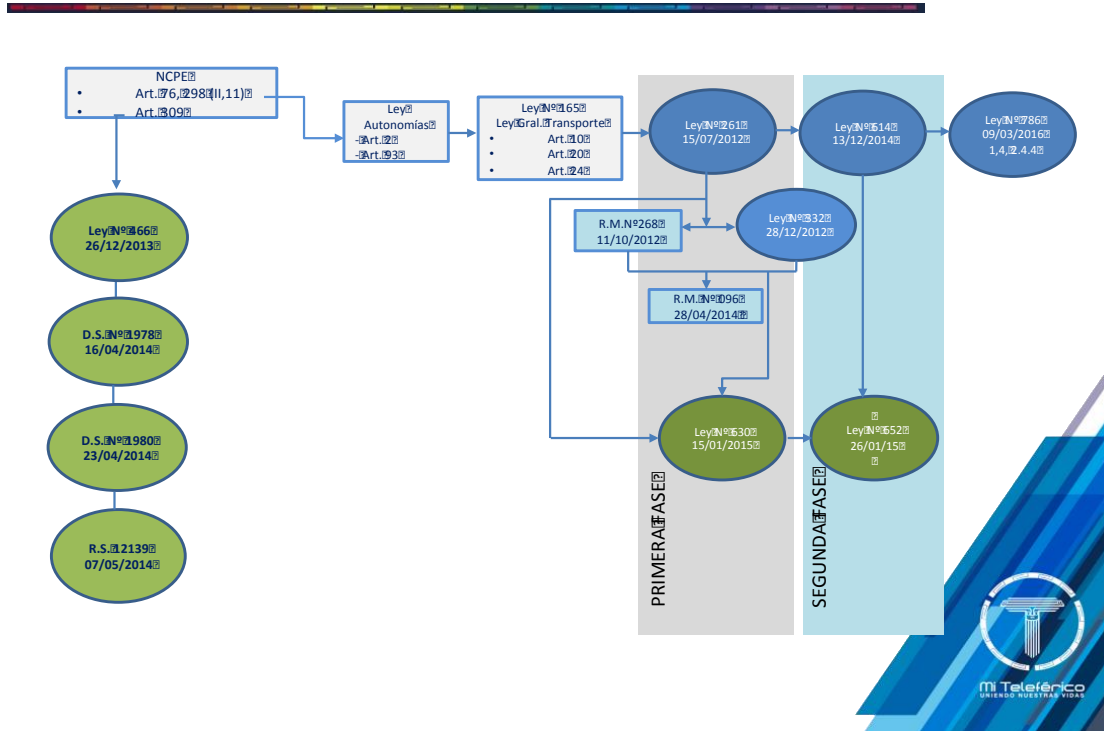
- 2) De acuerdo al Numeral, 18 Parágrafo I del Artículo 302, de la CPE los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias: 1) Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano. 2) Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. 3) Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. 4) Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 5) La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano, se la ejercerá en lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana.

La Figura N° 7 sintetiza la normativa aplicada y emitida para la ejecución de las dos fases que fueron o están en siendo ejecutados por la EETC MT.

Figura N° 7. Normativa aplicada y emitida para la ejecución de las dos fases que fueron o

están en siendo ejecutados por la EETC MT.

MARCO LEGAL



Políticas operacionales del BID

El objetivo de las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Sociales es impulsar la misión del Banco para lograr un crecimiento económico sostenible y cumplir los objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental y social de largo plazo. Los objetivos específicos de las Políticas y Salvaguardias son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental y social en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambiental y socialmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en las Políticas; y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental y social corporativa dentro del Banco.

Dado de que el Proyecto será ejecutado con el financiamiento del BID, durante la ejecución del mismo se aplican las políticas operacionales, PO, acordadas y que son

complementarias a la normativa y legislación nacional. Las mismas son las siguientes:

- OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias
- OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales
- OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario
- OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas
- OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo
- OP-102 Política de Acceso a la Información

Para este PRI son importantes los alcances de la (OP-102) sobre Disponibilidad de Información y que considera que la información debe ponerse a disposición del público en el tiempo y la forma apropiados para mejorar la transparencia y por ende, la calidad de las actividades.

La Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la *equidad*, lo cual implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se reduzcan las brechas existentes, reconociendo asimismo que estas brechas pueden perjudicar tanto a mujeres como a hombres. La Política identifica dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras. Se entiende por *empoderamiento de la mujer* la expansión en los derechos, recursos y capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar con autonomía en las esferas social, económica y política.

En febrero de 2006, el BID aprobó su Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP 765) y su Estrategia para el Desarrollo Indígena. El objetivo de esta política es potenciar la contribución del Banco al desarrollo de los pueblos indígenas en el logro de los siguientes objetivos: a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades de gestión) Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y a la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

Como se tiene previsto a adquisición de predios se activa la Política Operacional (OP-710) sobre Reasentamiento Involuntario. La PO fue aprobada por el Directorio en julio de 1998. La misma busca reducir al mínimo la necesidad del reasentamiento involuntario, y a elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) en los casos en que éste sea

inevitable y que debe estar orientado en los siguientes principios:

- Evitar o minimizar los desplazamientos de población.
- Asegurar la participación de la comunidad.
- Considerar el reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible.
- Definir los criterios para la compensación.
- Compensar según el costo de reposición.
- Compensar la pérdida de derechos consuetudinarios.
- Crear oportunidades económicas para la población desplazada.
- Proporcionar un nivel aceptable de vivienda y servicios.
- Tener en cuenta las cuestiones de seguridad.
- Los planes de reasentamiento deben tener en cuenta a la población de acogida.
- Obtener información precisa.
- Incluir el costo del reasentamiento en el costo general del proyecto.
- Tener en cuenta el marco institucional apropiado.
- Establecer procedimientos independientes de supervisión y arbitraje.

Análisis de equivalencias entre normativa nacional/experiencia acumulada MT y salvaguardias BID:

Para analizar la compatibilidad del Marco Legal con los requisitos de la OP-710 sobre Reasentamiento Involuntario del BID se consideran los siguientes elementos: las alternativas para el reasentamiento, los impactos cubiertos, los criterios de elegibilidad para la asistencia de compensación y reasentamiento, la información inicial requerida (censo, instrumentos, la evaluación social requerida), el reconocimiento de los diferentes tipos de afectación y la protección a los grupos vulnerables.

Existen diferencias entre la Legislación Boliviana y las Políticas Operacionales del Banco, aunque también existen semejanzas. La legislación boliviana no establece la figura legal del reasentamiento involuntario; sin embargo la política del Banco, prevé el Reasentamiento Involuntario y amplía el concepto considerando que el desplazamiento en proyectos de desarrollo debe ser considerado no sólo como una medida de mitigación sino como una oportunidad para el desarrollo. Ambos coinciden en afectar lo menos posible para evitar los reasentamientos o reducirlos al mínimo.

Tiene que tomarse en cuenta que la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública es del siglo XIX (30 de diciembre de 1884) y aunque contiene algunos anacronismos, los mismos han sido superados tanto por la Constitución Política del Estado como las normas

posteriores que contienen valores y principios fundamentales para el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales de los bolivianos y bolivianas, los que deben ser respetados y plenamente garantizados por los administradores y funcionarios públicos.

La otra diferencia está en los criterios de elegibilidad, para el Banco la ausencia de títulos legales sobre la tierra y otros recursos no debe ser un obstáculo para la compensación, aunque en muchos países las disposiciones legales existentes para la expropiación e indemnización sólo se aplican a las personas que tienen plenos derechos de propiedad de la tierra y la vivienda. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce a los propietarios que presenten documentación con registro en Derechos Reales (DD.RR) para expropiar inmuebles o compensar el valor del terreno por la Liberación del Derecho de Vía (LDDV) y las mejoras existentes dentro el Derecho De Vía (DDV). La legislación reconoce dos tipos de tenencias: los propietarios y los poseedores. Ambos son reconocidos para compensación en concordancia con la política OP-710.

En las expropiaciones llevadas a cabo por la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, el reconocimiento también es a los propietarios legales de los predios o inmuebles para ello aplican el Reglamento Operativo de Expropiaciones y Transferencias de bienes inmuebles, aprobado por Resolución Administrativa N° 030/2015 de 30 de abril de 2015, que determina el procedimiento a seguir tanto en la expropiación y la transferencia de bienes inmuebles declarados de necesidad y utilidad pública, conforme a la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015.

Se ha avanzado de manera significativa en cuanto a los criterios y procedimientos para determinar la indemnización justa, en un campo en el que existen algunas inconsistencias y procedimientos diferentes en los municipios. De esta forma se busca que la indemnización por expropiación tenga la finalidad de mantener el patrimonio del expropiado en el mismo estado que se encontraba antes de la expropiación. Reconocer una indemnización justa no significa ir en detrimento del patrimonio del Estado, sino lograr un equilibrio entre los intereses del Estado y el respeto de los derechos y garantías de las personas.

En cuanto a la información inicial requerida (censo, instrumentos de evaluación social, medición de los grados de vulnerabilidad) existe un desequilibrio entre la metodología legal formulada y que establece una serie de procedimientos frente a los procedimientos de la parte social que se enmarca al manejo de los conflictos. Faltan procedimientos para los distintos impactos que puede producir el reasentamiento involuntario sobre todo sobre las necesidades especiales de los grupos vulnerables. Es importante identificar los grupos o sectores particularmente expuestos a riesgos ya que el reasentamiento es difícil para todos, pero es especialmente traumático para quienes carecen relativamente de poder o están más profundamente apegados al lugar en que viven. Los grupos más vulnerables son las mujeres, las personas de edad y los pueblos indígenas. Las mujeres tienden a ser vulnerables porque en la planificación del reasentamiento se suele hacer caso omiso de sus intereses, asimismo los ingresos de la mujer y sus actividades productivas suelen considerarse como complementarias a las del hombre y no se tienen debidamente en cuenta en los planes de compensación. Y en relación a las personas de edad los cambios producidos les provocan desajustes por los cambios en su forma de vida o los nuevos patrones de empleo, también pueden sufrir conflictos generacionales ya que sus necesidades son distintas a la de los jóvenes.

Finalmente un tema central que la OP-710 recalca es la consulta a la comunidad y la participación de ésta para que el plan de reasentamiento sea eficaz, flexible y pueda

llevarse a feliz término. Reconociendo que en la práctica no siempre es fácil lograr la participación activa de todos los sectores de la población afectada se plantea que cuando sea posible, la población afectada debe participar para asegurar que las medidas de compensación reflejen las necesidades de la población afectada así mismo para facilitar una mayor transparencia y equidad.

Experiencias acumuladas en reasentamiento por Mi Teleférico, medidas complementarias a la indemnización.

Tal como se desarrolla en el Capítulo III, la EETC MT ha desarrollado la normativa para las expropiaciones y las indemnizaciones, se ha respaldado, además de la normativa vigente sobre el tema, de una serie de leyes y normativas para la transferencia coactiva de la propiedad privada partiendo de dos características de la misma, i) el ser una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del Derecho Público que no puede ser asimilada a la compraventa prevista en el derecho privado; ii) el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, lo que la diferencia de la confiscación.

Asimismo, reconociendo que la valuación de inmuebles para la expropiación en Bolivia no cuenta para su aplicación con una normativa específica, única, universal e inequívoca se elaboró una “Metodología para determinar la indemnización justa de bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública”, que puede ser enriquecida con los alcances y principios de la Política Operacional (OP-710), sobre todo en lo referido a los instrumentos de carácter social que hacen que el apoyo a las personas y familias afectadas no sólo sean de carácter esporádico o delegado a terceros, sino centralmente a que se establezcan de manera clara los procedimientos para restituir a los afectados como mínimo sus condiciones iniciales o mejorarlas, pues está confirmado que reasentamientos mal planificados pueden tener efectos a largo plazo no solamente para la población afectada sino para el proyecto en términos de resistencia y/o tensión..

A pesar de las brechas entre el marco normativo para la adquisición de predios y la política OP-710, en la práctica estas diferencias son parcialmente superadas a través de las soluciones específicas que la EETC MT implementa a través de las especificaciones que debe cumplir la Empresa Contratista de la obra para atender a las necesidades de los casos especiales. En el Anexo N° 1: Medidas complementarias a la indemnización se resumen las medidas que fueron implementadas ante situaciones que se presentaron en la ejecución de la primera fase. Las acciones emprendidas aún no tienen procedimientos establecidos para el apoyo a las personas y unidades familiares después de la expropiación total de los inmuebles.

Los informes sociales muestran situaciones de pobreza, marginalidad, precariedad y distintos grados de vulnerabilidad social como hogares a cargo de padres o madres solos/as, personas de la tercera edad, menores de edad a cargo de la dirección del hogar, o familias numerosas. La aplicación de la Ficha Social establece los grados de vulnerabilidad y la Empresa Contratista proporcionó algún apoyo como el pago de alquileres a personas afectadas por una reubicación total reconociendo los casos en que las unidades familiares no contaban con derecho propietario o pertenecían a un grupo vulnerable.. Como no se realizó un monitoreo del restablecimiento de sus niveles de vida se tiene una información parcial sobre la situación final de algunas de las familias.

Las anteriores situaciones también se presentaron en las expropiaciones parciales, algunas

familias extensas y con bajos recursos económicos recibieron apoyo con la construcción de viviendas o el pago de sus impuestos. En relación a afectaciones a colectividades se tuvieron 3 casos importantes: i) la afectación a 20 casetas de la Asociación de Sahumerios y Curanderos que fueron reconstruidas en predios de la nueva Estación 16 de Julio de la Línea Azul, ii) la reconstrucción de ambientes afectados a las unidades productivas de un Hogar de Niñas; iii) la afectación a 28 puestos de venta del Mercado Las Rosas, que fueron reasentados al interior de la Estación de Cotahuma. Pero las medidas se diseñaron y ejecutaron sin contar con un instrumento para planificar de forma sistemática la asignación de medidas de compensación por tipo de afectación, son dispersas, y tampoco hay una sistematización de los casos como tampoco carpetas de afectados/as.

Capítulo III: Identificación de afectados, impactos y medidas de compensación

Identificación de afectaciones

Tal como se estableció en acápites anteriores, de acuerdo a la información levantada por la EETC “MT” y los resultados del levantamiento de los distintos censos se establece que la ampliación de la estación 16 de Julio con una estructura independiente para la estación de la Línea Plateada, el emplazamiento de 21 torres, la construcción de la estación intermedia Faro Murillo y sus accesos viales, y la construcción de la estación anexa a la Estación Mirador (Teleférico Amarillo) en Ciudad Satélite provocan afectaciones a particulares y a predios particulares y un predio privado.

Se establecen las siguientes categorías:

Privados:

Personas individuales y/o colectivas que tienen inmuebles, terrenos o actividades económicas en el área directa de construcción de las estaciones o torres.

También se encuentran las entidades privadas que son responsables de servicios, tales como luz.

Públicos:

Instituciones públicas tales como Gobernaciones, Municipios que tienen predios para su funcionamiento así como mejoras en el área directa de construcción establecidas en (postas sanitarias, terrenos fiscales, plazas, vías, otros), incluido servicios como telefonía, transporte, caminos, luz, etc.

De la información inicial se establece que los afectados serán:

- a) Personas individuales: 61 puestos comerciales en espacio público; 5 viviendas de forma total (6 familias); 4 inquilinos; 4 negocios; 5 quioscos (1 peluquero, 1 amauta, 3 comideras) 2 predios privados de forma parcial; 2 casetas de *Yatiris (especialistas rituales aymaras*, 1 quiosco y 1 comerciante ambulante.
- b) Predio de una entidad privada COBEE BPCo, Compañía Boliviana de Energía

Eléctrica – (*Bolivian Power Company Limited*),

- c) Afectación a 7 viviendas que requerirá de construcción de jardineras verticales o reposición de muros

Afectación a predios de instituciones públicas:

- a) SEDCAM de la Gobernación de La Paz,
- b) ENTEL,
- c) Radio Patria Nueva
- d) Aceras, vías y 2 plazas (1 GAMEA y 1 GAMLPL)
- e) Una esquina de la plaza El Niño que requerirá de reposición y equipamiento en una jardinera de la plaza
- f) Afectación visual a campanario.

Características de los afectados:

De acuerdo al diagnóstico social inicial y visitas domiciliarias realizadas hasta la fecha, los afectados tienen las siguientes características:

Puestos comerciales en espacio público

Según el censo realizado, se identificaron un total de 61 puestos comerciales ubicados en espacios públicos, la gran mayoría concentrados en un solo sitio. La mayoría de estos consisten en carpas elementales cubiertas de plástico, con una dimensión de entre 1 y 3 metros cuadrados. En su mayoría los afectados son yatiris y amautas (Especialistas rituales Aymaras), los restantes incluyen vendedores de insumos para los rituales (denominados “chifleros”), vendedores de productos variados, bebidas alcohólicas para los rituales (cerveza), comida y bebidas. Los afectados tienen un tiempo de ocupación del sitio que varía entre 1 y 35 años.

5 Quioscos en espacio público

Tendrán que ser reubicados 5 quioscos (1 peluquero, 1 amauta y 3 comideras) que tiene sus anaqueles de unos 4 x2 metros cuadrados aproximadamente. Se encuentran en el lugar aproximadamente 10 años.

Casetas de yatiris

Se han identificado a dos casetas de yatiris afectadas, que forman parte de un conjunto de yatiris organizados en una asociación. Estas casetas solamente funcionan como lugar de ejercicio de rituales, y no sirven de lugar de pernocte. De estas dos casetas, una se encuentra en estado de abandono. La otra pertenece a un afectado mayor de edad en estado de vulnerabilidad. Se deberá compensar por lucro cesante y costo de reposición de

las casetas.

Viviendas afectadas de forma total

Según el censo realizado, se identificaron un total de cinco viviendas afectadas de forma total. En ningún de estos casos se pudo hasta la fecha comprobar el derecho de propiedad formal de los afectados que reclaman derechos sobre las viviendas. Debido al estado de precariedad de las viviendas y la ausencia de conexiones a servicios públicos como agua potable y saneamiento, existe un riesgo considerable que este derecho propietario no se pueda confirmar.

Además, de los propietarios o poseedores de las viviendas, estas también son utilizadas por inquilinos y tiendas en alquiler. En base a la información disponible, en cuatro casos los propietarios y poseedores residen en la vivienda, y en un caso en una vivienda alternativa. En tres casos, mencionaron también poseer terreno o vivienda alternativa. En dos casos, los propietarios o poseedores se encuentran en estado de vulnerabilidad: i) por ser madre soltera con hijos a su cargo; ii) por ser adultos mayores con familia numerosa a su cargo, incluyendo menores de edad. El tiempo de permanencia registrado en las viviendas varía entre los 4 y 25 años.

Viviendas afectadas de forma parcial

Se ha identificado a dos viviendas, cuyos patios son afectados de forma parcial por el emplazamiento de torres. En ambos casos, los propietarios no residen en la vivienda, teniendo su residencia en otra vivienda. Los espacios se usan para varias actividades comerciales. Estas no son afectadas por el emplazamiento de las torres. Hasta la fecha no se pudo determinar si los propietarios cuentan con derechos formales sobre las viviendas.

Inquilinos

Las viviendas afectadas en su totalidad incluyen la presencia de cuatro unidades de inquilinos afectados, consistiendo de una familia con dos hijos menores, y tres inquilinos individuales. En base a la información disponible se estima que dos de los inquilinos individuales inicialmente ingresaron a la vivienda bajo la modalidad de anticrético y permanecieron después de cumplido el periodo acordado y frente la inhabilidad del propietario de devolver el monto del anticrético. Hasta la fecha no se cuenta con información suficiente para determinar las características de estos afectados, información que deberá ser complementada.

Negocios

Las viviendas afectadas en su totalidad incluyen la presencia de un total de cuatro negocios que utilizan parte de la vivienda, desarrollado por los posesionarios o en espacios alquilados. Se trata de tiendas que venden sándwiches, misceláneas y un taller de mecánica.

En el anexo 4 se encuentra mayor información sobre los afectados.

Medidas de compensación y criterios de elegibilidad

El principal criterio de elegibilidad que se ha considerado para ejecutar el Plan de

Reasentamiento constituye la forma y tipo de afectación que se puede causar a las unidades familiares, a las casetas de Yatiris y al desplazamiento de gremialistas que serán afectadas por una expropiación por los efectos constructivos del emplazamiento de torres, estaciones y vías de acceso. La población afectada ha sido evaluada de acuerdo a criterios socioeconómicos, legales, físicos, estableciéndose que son elegibles para el reasentamiento.

Con base a los resultados de los censos se han identificado diferentes niveles socioeconómicos de los afectados, la evaluación social ha permitido identificar que las condiciones económicas de las familias que habitan en las viviendas a afectar, presentan en su mayoría niveles de baja vulnerabilidad. Por lo tanto, estas familias serán partícipes y beneficiarios de lo establecido en el presente Plan de reasentamiento.

Asimismo se ha desarrollado un análisis de vulnerabilidad que ha permitido establecer factores de vulnerabilidad de la población cuyo objetivo fundamental será determinar planes de acompañamiento y asistencia adecuados a su condición de vulnerabilidad.

Los tipos de afectación y las distintas medidas de compensación y mitigación se establecen

en el siguiente cuadro:

Cuadro Nro. 9. Tipos de afectación y medidas de compensación

Tipo de afectación	Alternativas de medidas de compensación y mitigación
Afectación parcial de terrenos con Derecho Propietario	<ul style="list-style-type: none"> • Indemnización que compensa en efectivo por el porcentaje en que se estima se reduce el valor de la propiedad y sobre la base de la Metodología para determinar la indemnización justa de terrenos establecida en Metodología para Determinar la Indemnización Justa de Terrenos Bienes Privados Declarados de Utilidad y Necesidad Pública de la EETC MT.
Afectación parcial de viviendas con Derecho Propietario	<ul style="list-style-type: none"> • Compensación en efectivo por el porcentaje en que se estima se reduce el valor de la vivienda. • La indemnización se basa en la Metodología para determinar la indemnización justa de construcciones establecida en la Metodología para Determinar la Indemnización Justa de Terrenos Bienes Privados Declarados de Utilidad y Necesidad Pública de la EETC MT. • Si se afecta a la estructura se realiza la reposición de la misma. • Asistencia técnica para refacciones (en caso de ser necesario)
Afectación parcial de terrenos sin Derecho Propietario	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplicará la metodología establecida para determinar la indemnización justa de terrenos. • Apoyo jurídico y social para el saneamiento de su derecho propietario. • Apoyo en la actualización de la superficie final que será inscrita en Derechos Reales.

<p>Afectación total de viviendas sin Derecho Propietario demostrable</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplicará la metodología establecida para determinar la indemnización justa de construcciones. • Apoyo jurídico y social a los propietarios para el saneamiento de su derecho propietario. • En el caso de la incapacidad de demostrar el derecho propietario, se podrá elegir entre una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reposición de la vivienda a través la adquisición de una vivienda equivalente. ○ En el caso que los afectados tengan otro terreno en propiedad se podrá reponer una infraestructura equivalente a la afectada. ○ Contrato de anticrético a nombre del Jefe/Jefa de hogar para reponer una vivienda equivalente a la afectada. • En el caso que se puede demostrar el derecho propietario, pero los afectados se encuentran en estado de vulnerabilidad, se deberá ofrecer las alternativas de reposición de vivienda listada en el acápite anterior. • Apoyo en el traslado de sus pertenencias. • Asesoría social para el restablecimiento de acceso a servicios de salud y educación (si se requiere).
<p>Afectación a inquilinos/arrendatarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación con suficiente antelación de la afectación del inmueble. • Se brindará asistencia/asesoramiento en cuestiones legales e inmobiliarias para encontrar una vivienda equivalente en alquilar. • Apoyo en el traslado de pertenencias. • Asesoría social para el restablecimiento de acceso a servicios de salud y educación (si se requiere).
<p>Afectación de actividad económica: Pérdida de casetas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reposición de las casetas afectadas en iguales o mejores condiciones de acuerdo al avalúo y los documentos de respaldo respectivos. • Apoyo para asegurar la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento de las condiciones favorables y ventajosas que ofrecía la ubicación. • Compensación por lucro cesante

Afectación a actividad económica: puestos comerciales en la vía pública	<ul style="list-style-type: none"> • El reasentamiento se realizará en el mismo sector a fin de evitar una afectación al acceso a su clientela. • El traslado se realizará durante la noche, a fin de evitar la interrupción de sus actividades económicas. • Se brindará apoyo en el traslado de sus puestos comerciales. • En el caso de los afectados en el sector Faro Murillo, firma de contratos de arrendamiento en el nuevo emplazamiento para asegurar su permanencia. • Si la afectación es momentánea e implica la interrupción de la actividad económica se pagará lucro cesante.
Afectación a actividad económica: negocio desarrollado por el propietario o inquilino de un inmueble	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación con suficiente antelación de la afectación del inmueble. • Asesoría inmobiliaria para el alquiler o anticrético de un local equivalente de acuerdo al tipo de negocio. • Apoyo en el traslado del negocio.
Afectación pública por torre o Estación sin afectados privados	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia a título gratuito.

Acompañamiento a familias vulnerables

Para los afectados identificados como vulnerables, se establecerán las actividades de acompañamiento, tomando en cuenta los criterios de vulnerabilidad del área social. Si una familia o persona es identificada en este grupo requerirá de un acompañamiento para la adaptación a las nuevas condiciones, en términos de la afectación a su vivienda y la reinstalación de sus actividades socioeconómicas.

El profesional social coordinará las medidas de acompañamiento con el área legal e infraestructura, en función al ámbito respectivo. Adicionalmente a las medidas de mitigación establecidas se asumirán otras medidas de acompañamiento que de manera referencial podrían ser las siguientes, dada la dinámica y temporalidad de las condiciones sociales.

- Las familias vulnerables cuyas actividades productivas hayan sido afectadas y en función al tipo de afectación, recibirán apoyo y orientación para la inversión de dinero en la reposición de la afectación, podrá realizarse por ejemplo a través de la compra de insumos u orientación para la habilitación de espacios, que permitan restituir en iguales o mejores condiciones la afectación.
- Acompañamiento y orientación especial a los afectados de la Tercera Edad y madres solas para el cobro y debida inversión de la indemnización (si corresponde) en beneficio del afectado.

Vulnerabilidad

Se entiende por vulnerabilidad la característica de una persona o grupo desde el punto de

vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto provocado por un proyecto. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la sociedad. Se establece que una familia/persona es vulnerable cuando el o la jefe del hogar pertenece a alguno de los siguientes grupos:

- ✓ Madre sola o padre solo, son casos de familias desintegradas por viudez, divorcio u otro motivo que deja a la madre a cargo de los hijos y a su vez, como jefa de familia.
- ✓ Tercera edad, engloba a las personas mayores de 60 años que son jefes de familia y tienen a su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones.
- ✓ Menores de edad a cargo de la dirección del hogar, son casos en los cuales los padres han muerto, han migrado o simplemente no tienen la capacidad de dirigir el hogar por enfermedad o alcoholismo.
- ✓ Personas con discapacidad o enfermedad que son jefes de familia y tienen a su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones.

Adicionalmente, una familia es vulnerable cuando se trata de:

- ✓ Familia Numerosa, se refiere a las familias que tienen 5 o más hijos o dependientes, menores de edad. Se considera la mayoría de edad a partir de los 18 años, sin embargo en muchos casos, el cuartel se constituye en el paso de niños a hombres, pudiendo contraer familia o responsabilidades en la comunidad. Los hijos mayores de 18 años que se encuentran estudiando y aún dependen de la familia cuentan dentro del grupo mencionado.
- ✓ Miembros de la familia con discapacidad, en este grupo se encuentra algún miembro de la familia con alguna incapacidad física, mental o enfermedad crónica, En este caso la familia será considerada dentro del grupo de familias vulnerables.

La determinación del Grado de Vulnerabilidad se establece en relación a los impactos-por efectos constructivos- en una familia considerada socialmente vulnerable de acuerdo a los criterios anteriormente establecidos. El grado de vulnerabilidad identificado se considera primordial para determinar el tipo de compensación y acompañamiento que se brindará a las personas afectadas para que su situación de vida sea igual o mejor a la identificada al iniciar el Proyecto.

Durante el levantamiento de información en campo se pudo identificar tres afectados que tienen al menos una o más de las condiciones antes mencionadas: un yatiri (por ser adulto mayor) y dos familias cuya vivienda es afectada (una por ser madre soltera con hijos a su cargo, y otra por ser adultos mayores con familia numerosa, incluyendo nietos menores de edad). Éstos serán considerados dentro del grupo vulnerable. Conforme se genere datos más detallados sobre los afectados durante la ejecución del Plan, incluyendo información sobre niveles de pobreza, se podrá actualizar el listado de afectados en estado de

vulnerabilidad, así como las medidas de compensación asignadas.

Capítulo IV: Proceso metodológico

Registro catastral y de tenencia y propiedad de la tierra.

La empresa estatal “Mi Teleférico” solo utiliza de manera referencial el certificado catastral (catastro urbano) para el avalúo de la propiedad a ser expropiada. Pese a este criterio al propietario del bien inmueble no se le exige la tenencia del certificado catastral en ninguna de las etapas del avalúo.

En lo referente a la tenencia y propiedad de la tierra la EETC MT no cuenta con una metodología para tratar los casos en los cuales los poseedores no cuenten con los documentos legales correspondientes que indiquen su derecho propietario, los cuales son:

- Testimonio de compra-venta
- Tarjeta de Propiedad o Folio Real

A pesar de que no es un requisito para la realización del avalúo se debería tomar en cuenta que sin la documentación adecuada no se podrá realizar todo el proceso legal por el cual la propiedad a ser expropiada pase a nombre de la EETC MT, y al mismo tiempo, el de colaborar a los propietarios del bien expropiado a tener toda su documentación legal en orden. Este proceso legal tiene como base la Minuta de Transferencia, la cual después tendrá que ser elevada a un Testimonio, con el cual se podrá conseguir el Folio Real, documento que da pleno derecho propietario sobre el terreno.

Por tanto, durante el análisis legal y catastral de los predios afectados, se necesita identificar la prevalencia de los siguientes casos y definir una metodología para poder resolver los casos identificados:

- a. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble solo cuente/n con minuta de transferencia de parte del anterior propietario y este último todavía siga vivo.
- b. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble solo cuente/n con minuta de transferencia de parte del anterior propietario y este último haya fallecido.
- c. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble solo cuente/n con minuta de transferencia de parte del anterior propietario y este último siga vivo pero que tampoco cuente con la documentación legal que le acredite derecho propietario.
- d. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble cuente/n con un testimonio sin registrar en derechos reales el cual indique una superficie menor a la que está ocupando físicamente y esta superficie esté fuera de los márgenes de tolerancia marcados por el municipio correspondiente.
- e. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble no cuente/n con ninguna documentación legal que acredite su derecho propietario.

Procedimiento para el avalúo de bienes y tierras

La EETC MT divide en dos el procedimiento de avalúo que utiliza y para ello plantea dos

metodologías:

- a. Metodología para determinar la indemnización justa de terrenos.
- b. Metodología para determinar la indemnización justa de construcciones.

Para determinar la indemnización justa de terrenos la EETC MT sigue los siguientes pasos:

- Obtención de al menos tres referencias de valores de terreno por metro cuadrado próximos al predio a ser valuado. Los mismos tendrán que cumplir con condiciones topográficas, de accesibilidad, viabilidad geométrica, servicios y de uso de suelo similares. En caso de no encontrar terrenos se consideraran propiedades con construcción, a las cuales se les sustraerá el precio de la construcción para así tener un **precio de referencia**.
- De la sumatoria de todos los valores encontrados se obtiene un promedio.
- Se realiza un cálculo para conseguir un coeficiente de corrección, el mismo está basado en:
 - Coeficiente topográfico: grado de inclinación del terreno.
 - Coeficiente de accesibilidad: Tipo de vía de acceso a la propiedad.
 - Coeficiente geométrico: forma del terreno.
 - Coeficiente de ubicación: Ubicación del predio en relación al manzano.
 - Coeficiente de vía: material de la vía de acceso a la propiedad.
 - Coeficiente de servicios: Servicios básicos.
 - Coeficiente de ajuste: Expectativa de venta.
- El producto de todos estos coeficientes da como resultado el “**Coeficiente de corrección**”.
- Finalmente, teniendo el **precio de referencia** y el **coeficiente de corrección** se multiplican éstos junto con la superficie del terreno para determinar el valor del terreno.

Para determinar la indemnización justa de construcciones, la EETC MT sigue los siguientes pasos:

- Trabajo de campo: en el cual se identificara la cantidad de bloques construidos y sus dimensiones expresadas en metros cuadrados. También se consideran las mejoras realizadas a cada bloque. Se identifica la tipología de construcción de cada bloque en

base a la calidad de materiales utilizados para su construcción.

- Se considera 5 tipologías distintas:
 - Muy buena
 - Buena
 - Económica
 - Interés social
 - Marginal
- Una vez asignada una tipología se tiene un precio unitario por metro cuadrado construido en el cual está incluido los impuestos de ley, contribuciones sociales y la utilidad de la construcción.
- Del producto del precio por metro cuadrado y del área construida por bloque se obtiene un **avalúo inicial**.
- Se realiza un cálculo para conseguir un coeficiente de corrección, el mismo está basado en:
 - Coeficiente de antigüedad: antigüedad de la construcción.
 - Coeficiente de corrección diferido: características de ventilación, iluminación y funcionalidad.
 - Coeficiente de estado de conservación: grado de mantenimiento.
 - Coeficiente de uso: uso que se le da a la construcción.
- El producto de todos estos coeficientes da como resultado el “**Coeficiente de corrección**”.
- Finalmente teniendo el **avalúo inicial** y el **coeficiente de corrección** se multiplican éstos para determinar el valor de la construcción.
- Sumando los valores conseguidos en el avalúo del terreno y del avalúo de los bloques construidos se obtiene el avalúo total del predio a ser expropiado.

Este proceso de avalúo es una parte de la metodología desarrollada para determinar la Indemnización Justa o Monto Indemnizable de bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública para el Proyecto de Construcción de las tres líneas del STC. En sus procedimientos es un importante avance en relación a la práctica desarrollada por los municipios. Pero la indemnización únicamente en dinero no constituye por lo general la mejor solución. Por ello se desarrolla este Plan de Reasentamiento para que la EETC MT asuma en el costo de la reposición el apoyo necesario a las familias afectadas para cerciorarse de que la indemnización es utilizada para la reposición de los bienes y para apoyar a los hogares desplazados y que necesiten ayuda a transportar sus posesiones, su equipo, así como alojamiento temporal y apoyo en el lugar en que se instalen.

Procedimiento para saneamiento de tierras y propiedades

La EETC MT no cuenta con una metodología de saneamiento de tierras y propiedades,

tanto para áreas desalojadas como para nuevas viviendas.

El Plan de Reasentamiento plantea que para las áreas desalojadas se tome en consideración los puntos mencionados en el punto relacionado con el Registro Catastral del presente capítulo, los cuales indican los posibles casos que se pueden presentar por la falta de documentación legal de parte de los propietarios cuyos terrenos serían expropiados.

Uno de los objetivos el Plan de Reasentamiento es compensar según el Costo de Reposición, pero al mismo tiempo se establece que la indemnización únicamente en dinero no constituye por lo general la mejor solución, por ello también es necesario ofrecer apoyo para cerciorarse de que es utilizada para la reposición de los bienes. Por ello se establece que la EETC MT debe ayudar a los propietarios cuyo terreno y/o construcción fueron expropiados de manera total a encontrar una similar en base al avalúo realizado. En el presente Plan de Reasentamiento se incorpora medidas para prestar asistencia a las familias, que así lo requiera para que repongan su vivienda utilizando la indemnización que perciben como pago por la expropiación. Este procedimiento está fundamentado en la “Metodología para determinar la indemnización justa de bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública” del EETC MT del 2015, que establece que el **patrimonio del expropiado se debe mantener inalterado**. Tomando en consideración este criterio se debe apoyar con opciones para que el expropiado/a recuperen o mejores sus condiciones. Estas opciones pueden incluir una combinación de las siguientes:

- a) Identificación de al menos de opciones de terrenos y/o viviendas con características similares al predio expropiado referidas a:
 - Topográfica: grado de inclinación del terreno.
 - Accesibilidad: Tipo de vía de acceso a la propiedad
 - Geometría: forma del terreno.
 - Ubicación: Ubicación del predio en relación al manzano.
 - Servicios básicos.
- b) Verificación de documentación legal del nuevo predio.
- c) Comparación de la nueva propiedad en relación al avalúo realizado, tanto en los casos de ser solo terreno o de bloques construidos.
- d) Asesoramiento para el expropiado en la realización de todos los trámites; tanto legales como técnicos, en el proceso de compra-venta del nuevo predio.

Procedimiento para Expropiación por razones de utilidad pública

La EETC “MT ha establecido sus procedimientos, metodologías y etapas, tanto para la expropiación de bienes inmuebles así como para las transferencias a título gratuito de predios e inmuebles de las entidades que hayan sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el proyecto, sobre la base, gestión y puesta en marcha de todo un andamiaje jurídico de leyes y decretos tales como la Ley N° 261 para la Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto (15 de julio de 2012); Ley N° 332 (28 de diciembre de 2012); Ley N° 466 de la Empresa Pública (26 de diciembre de 2013); Decreto Supremo N° 1980 (23 de abril de 2014); Ley N° 630 (15 de enero de 2015); Ley N° 652 Construcción e

Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase (26 de enero de 2015) y Ley N° 926 sobre Franjas de Reserva y Seguridad del Sistema de Transporte por Cable (12 de Abril 2017).

Si bien toda esta normativa ha permitido acelerar la construcción e implementación del STC en las ciudades de La Paz y El Alto, tanto en su primera como en su segunda fase, se requiere que la EETC tenga flexibilidad para ampliar algunos de los plazos que deben cumplir las familias afectadas, por ejemplo en relación al avalúo y los 10 días hábiles administrativos, computables desde la fecha de notificación, para presentar de manera formal, un avalúo técnico elaborado por un profesional competente. Se considera que este plazo es muy corto para familias que por sus características sociales puede que no tengan toda su documentación disponible y menos conozcan cómo conseguir los servicios de profesionales para el avalúo. Asimismo, incluso si solicitaran a que el Colegio de Arquitectos les proporcione una lista de tres peritos, no siempre los mismos podrán estar disponibles y realizar el trabajo en tan poco tiempo.

Por ello, en base a la experiencia desarrollada en la dos fase se recomienda flexibilizar los plazos establecidos en su reglamento y metodología. Para fines de la Línea Plateada, los plazos deberán flexibilizarse de acuerdo a los casos y las características de las familias afectadas. Además, como parte del proceso de involucramiento con los afectados, se deberá informar de manera apropiada los procedimientos que por sus características técnicas y jurídicas no son fácilmente comprensibles. Asimismo, se debe apoyar a que las familias se preparen para los procesos para la expropiación proporcionándoles asistencia y tiempo.

En el procedimiento de Expropiación de la EETC MT se establecen 5 etapas: Identificación, Notificación, Avalúos, Determinación del monto indemnizable, Pago. En el Anexo 4 se resumen los fundamentos legales así como la propuesta metodológica para este procedimiento.

1. Identificación

Se procederá a determinar la ubicación y superficie de bienes inmuebles privados declarados de necesidad y utilidad pública, de dos formas:

- A) Cuando exista el Estudio de Definición de Líneas-EDL, que definirá la ubicación y superficie de las áreas requeridas.
- B) Cuando no se cuente con el-EDL, y si las condiciones técnicas lo permiten, se determinará la ubicación y superficie de las áreas requeridas en base al Estudio de Identificación-EI, que deberá ser complementado con un Informe Técnico Especial-ITE.
- A) En caso de contar con el Estudio de Definición de Líneas-EDL, deberá emplearse éste documento para la ubicación y definición de las áreas de afectación. Para el efecto se seguirán los siguientes pasos:
 - ⇒ La Empresa Contratista Ejecutora del Proyecto, concluido el Estudio de Definición de Líneas-EDL, elaborará el Informe de Estudio de Afectación-IEA, para la implementación y construcción de la estación, torre y áreas complementarias, para ello identificará y determinará mediante documentos y planos, la ubicación y

superficie de los bienes inmuebles necesarios para el mencionado proyecto.

- ⇒ Dicho documento será remitido a la Supervisión para su revisión y aprobación; a su vez la Supervisión remitirá dicho documento, mediante carta, a la Gerencia de Desarrollo de Proyectos.
 - ⇒ La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, dará visto bueno al Informe de Estudio de Afectación emitido por la empresa contratista ejecutora del proyecto, aprobado por la supervisión y emitirá Informe Técnico de Afectación - ITA.
- A) El Informe Técnico de Afectación - ITA, contendrá planos e información que respalden la identificación de la ubicación y superficie de bienes inmuebles privados útiles y necesarios para el proyecto, el cual deberá contar con el visto bueno del Jefe de Departamento.
- B) Cuando no se disponga del Estudio de Definición de Líneas-EDL, se podrá definir las áreas de afectación soportándose a través del Estudio de Identificación-EI, de ser necesario se podrá solicitar un Informe Técnico Especial-ITE, para el efecto se seguirán los siguientes pasos:
- ⇒ La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, realizará una evaluación del Estudio de Identificación-EI, y en caso de ser necesario, solicitará el documento final de los Informes Técnicos Especiales-ITE, que permiten determinar las áreas de afectación necesarias de alguna estación, torre y áreas complementarias de manera total o parcial.
 - ⇒ El Estudio de Identificación- EI, y el Informe Técnico Especial-ITE, serán evaluados por la Gerencia de Desarrollo de Proyectos y adjuntados como respaldo del Informe Técnico de Afectación-ITA.
 - ⇒ El Informe Técnico de Afectación-ITA, contendrá planos e información de identificación de ubicación y superficie de los bienes inmuebles privados necesarios para el proyecto, el cual deberá contar con el visto bueno del Jefe de Departamento.

2. Notificación

La Gerencia Jurídica de la EETC - MT, en base al Informe Técnico de Afectación, elaborará un Informe Jurídico de Afectación, que sustente la emisión de la Resolución Administrativa; debiendo en el mismo sentido proceder a su publicación en un periódico de circulación nacional y notificar con la misma a los propietarios de los bienes inmuebles identificados como necesarios para el proyecto, conforme establece la normativa vigente.

3. Avalúos.

Los propietarios, de acuerdo al numeral 2 del artículo 3° de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, en el plazo de **diez (10)** días hábiles administrativos, computables desde la fecha de notificación, presentarán de manera formal, un avalúo técnico elaborado por un profesional competente, que consigne un monto único y determinable, correspondiente a su bien inmueble; en caso de no presentar su avalúo, los propietarios se someterán al

avalúo que determine la EETC - MT.

La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, efectuada la notificación señalada, instruirá a la Empresa Contratista Especializada, realizar el respectivo avalúo del bien inmueble determinado. La Empresa Contratista Especializada, deberá realizar el levantamiento técnico de avalúo *in situ* del bien inmueble objeto de expropiación en un plazo de **ocho (8)** días hábiles a partir del ingreso al bien inmueble y remitirá el avalúo a la supervisión para su revisión y aprobación.

En el plazo de **dos (2)** días hábiles, la Supervisión deberá presentar el correspondiente avalúo técnico a la EETC-MT. El mismo que deberá contener una planilla que registre el nombre y la firma de los responsables de la elaboración, revisión, supervisión y fiscalización. La Empresa Contratista Especializada, deberá aplicar la Metodología de Avalúos elaborada para el proyecto, en apego a lo establecido por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y con base a los parámetros técnicos de carácter indicativo del Decreto Supremo N° 22902, Resolución Administrativa GMLP/ATM/N° 017/2014 y Resolución Suprema N° 09407, con la finalidad de determinar la indemnización justa del bien inmueble declarado de necesidad y utilidad pública. La Empresa Contratista emitirá un Informe Técnico de Afectación Complementario, que verifique o ajuste el área inicialmente identificada.

La Supervisión del proyecto verificará la aplicación de la Metodología de Avalúos y emitirá su aprobación respectiva. Asimismo, revisará y aprobará el Informe Técnico de Afectación Complementario emitido por la empresa contratista. La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, revisará el avalúo y a través de Informe Técnico de Aprobación, aprobará el avalúo presentado por la empresa contratista, que contará con el visto bueno del Jefe de Departamento y Gerente de Desarrollo de Proyectos. Asimismo, mediante Informe Técnico de Afectación complementario, dará el Visto Bueno al Informe Técnico de Afectación emitido por la contratista y aprobado por la Supervisión.

La superficie identificada mediante Resolución Administrativa, podrá ser ajustada al momento de realizar el avalúo, de acuerdo al replanteo *in situ* realizado por la empresa contratista. En caso de corresponder un proceso de dormición, la superficie definitiva será la establecida en el avalúo determinado por el perito dirimidor.

4. Determinación del monto indemnizable

Cuando el propietario presente su avalúo, la Gerencia de Desarrollo de Proyectos comparará el avalúo elaborado por la empresa contratista y del propietario, cuyos resultados, conclusiones y recomendaciones determinarán el monto considerado como indemnizable contenido en un Informe Técnico Comparativo, elaborado por el profesional asignado, que contará con el visto bueno del Jefe de Departamento y Gerente de Desarrollo de Proyectos.

La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, para comparar los avalúos existentes, deberá considerar el contenido de los mismos, evaluando sus similitudes y diferencias que inciden en la definición del monto indemnizable. Cuando el avalúo presentado por el propietario es menor al determinado por la EETC-MT, se comunicará al propietario que su monto es considerado como indemnizable, solicitando su pronunciamiento en el plazo de **tres (3)**

días hábiles.

Cuando el avalúo presentado por el propietario es mayor al determinado por la EETC- MT, se comunicará al propietario que el monto del avalúo establecido por la EETC-MT, es considerado como indemnizable, solicitando su pronunciamiento al respecto de manera escrita en el plazo de **tres (3) días hábiles**.

De existir más de un monto en el avalúo presentado por el propietario, la Gerencia de Desarrollo de Proyectos, comparará dichos montos, con el monto determinado por la EETC-MT, y se procederá de la siguiente manera:

- Si los montos del avalúo presentado por el propietario son mayores al determinado por la EETC-MT, se comunicará al propietario que el monto considerado como indemnizable es el determinado por la EETC-MT, para que manifiesten su aceptación o rechazo de forma expresa en el plazo de **tres (3) días hábiles**.
- Si los montos presentados en el avalúo del propietario, uno fuera inferior y el otro superior al monto determinado por la EETC-MT, corresponderá solicitar al propietario consigne un monto único, fijo y determinable de su bien inmueble de forma escrita, en plazo de tres (3) días hábiles.
- Si los montos del avalúo presentado por el propietario, son menores al determinado por la EETC-MT, corresponderá solicitar al propietario consigne un monto único, fijo y determinable de su bien inmueble de manera escrita en el plazo de tres (3) días hábiles.
- Cumplido el plazo de tres (3) días hábiles, se procederá la determinación del monto indemnizable. El monto determinado por la EETC-MT, será comunicado mediante carta, al propietario, para que éste en el plazo de tres (3) días hábiles, se pronuncie con la aceptación o rechazo.
- La aceptación del propietario, será comunicada a la EETC-MT mediante carta, debiendo la Gerencia de Desarrollo de Proyectos, elaborar el Informe Técnico Final de Avalúo, que señale el monto indemnizable.
- El rechazo del propietario, será comunicado mediante carta a la empresa y se procederá conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 3° de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, en el marco del artículo 4° de la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015.

En caso de rechazo del monto indemnizable comunicado por la EETC MT o la existencia de un conflicto de mejor derecho propietario, la EETC-MT, oficiará al Colegio de Arquitectos o Sociedad de Ingenieros según corresponda, para la designación del perito dirimidor, que procederá a determinar el monto indemnizable definitivo, conforme el numeral 3 del artículo 3° de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, en el marco del artículo 4° de la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015.

El perito dirimidor, en el plazo de **diez (10) hábiles** a partir de la notificación con su designación, salvo excepciones debidamente fundamentadas, deberá presentar a la EETC-MT el avalúo técnico, que consigne un monto único y determinable del bien inmueble, siendo éste monto de carácter concluyente o definitivo, sin posibilidad de reconsiderar los

avalúos previos.

La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, elaborará un Informe Técnico Final de Avalúo, que consigne el monto indemnizable establecido por el perito dirimidor; peritaje que deberá ser puesto en conocimiento del propietario o propietarios, para iniciar el proceso de pago, de igual forma elaborará el informe Técnico de Afectación Complementario II, que ratifique que la superficie identificada por el perito dirimidor, corresponde al bien inmueble identificado.

5. Pago

La ejecución del pago por expropiación, se inicia con la elaboración de los siguientes informes a cargo de las Gerencias dependientes de la EETC-MT:

- Informe Técnico de Afectación Complementario – ITAC, elaborado por la Gerencia de Desarrollo de Proyectos, que ajuste la ubicación y superficie del bien inmueble identificado, de acuerdo al replanteo in situ; de corresponder a un proceso de dirimición, elaborará el Informe Técnico de Afectación Complementario II, en base al avalúo pericial que consigna la superficie ajustada.
- Informe Técnico Final de Avalúo, que señale el monto indemnizable por la expropiación de bienes inmuebles.
- Informe Jurídico, elaborado por la Gerencia Jurídica, de acreditación del derecho propietario del bien inmueble útil y necesario para el proyecto.

Emitido el Informe Jurídico, la Gerencia Jurídica, remitirá a la Gerencia Ejecutiva, mediante nota y en fotocopias legalizadas la carpeta de expropiación, solicitando instruya a la Gerencia Administrativa Financiera, el pago del monto indemnizable definitivo. La EETC-MT, realizará el pago de manera directa con la suscripción de la Minuta de transferencia o mediante autoridad jurisdiccional en caso de inconcurrencia o renuencia a la suscripción del documento de transferencia por el propietario del bien inmueble, la existencia de conflicto de mejor derecho propietario o la reclamación de un tercero por razón de servidumbre, hipoteca, arriendo, gravamen u otro que afecte la propiedad.

En caso de efectuar el pago mediante autoridad jurisdiccional, la EETC-MT, deberá apersonarse ante la autoridad competente en la vía civil voluntaria y efectuar la solicitud de orden de depósito judicial del monto indemnizable y consiguiente suscripción del documento de transferencia, conforme lo previsto en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, en el marco de lo establecido por el artículo 4 de la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015. Ejecutado el pago, la Gerencia Jurídica deberá iniciar el trámite de regularización de derecho propietario a favor de la EETC-MT, conforme el parágrafo III de la Ley N° 630 de 15 de enero de 2015.

Sistematización de la información y elaboración de carpetas

Con la finalidad de apoyar el sistema de seguimiento de cada uno de los afectados se procederá a elaborar carpetas individuales que sistematizará la información social, legal y de avalúo de las afectaciones. Las carpetas de afectación del Plan de Reasentamiento

podrán contener la siguiente información básica:

- El nombre del afectado o afectada.
- Código
- Resumen Ejecutivo: un resumen de los datos relevantes de la carpeta respecto a la información social, legal, avalúo y las conclusiones y recomendaciones del análisis.
- Pasos del procedimiento para el avalúo.
- Relevamientos de campo.
- Metodología de valoración de las pérdidas y determinación de tipos de compensación.
- Metodología del área social: Relacionamiento con la comunidad y los afectados, aplicación de instrumentos para el relevamiento de datos y avalúo socioeconómico familiar, análisis de vulnerabilidad, sistematización del relevamiento de datos, dictamen y avalúo socioeconómico.
- Metodología del área legal: Ficha del catastro legal, Informe legal, Acta de acuerdo, Documentación legal del afectado, Documentos que acrediten el derecho propietario, Documentos que acrediten la posesión.

Lineamientos para elaborar una actualización del plan de reasentamiento

Si por razones geológicas, de ubicación o de diseño la Empresa Contratista estableciera que se requieren modificaciones al Estudio de Definición de Líneas-EDL, y que la misma signifique modificaciones para la ubicación de las estaciones, emplazamiento de torres o construcciones conexas y que den lugar a nuevas áreas de afectación con las consiguientes implicaciones de impactos físicos y de reasentamiento deberán seguirse los siguientes lineamientos.

A fin de garantizar el restablecimiento de las condiciones socio-económicas de las familias afectadas y mitigar los impactos negativos que puedan producirse deberá elaborarse una Actualización del Plan de Reasentamiento que debe contener las mismas bases y alcances del PR.

Los criterios de identificación de beneficiarios, sus características y las soluciones de compensación y mitigación deberán ser claros, consistentes y compatibles con los establecidos en el presente Plan de Reasentamiento. La actualización integrará mínimamente los siguientes elementos:

- a) Un censo socio-económico de las personas afectadas y la valoración de los activos.
- b) Una descripción de la compensación y los tipos de asistencia que se proporcionarán.
- c) El desarrollo de consultas con las personas y familias afectadas sobre las alternativas aceptables.
- d) Los medios de verificación de la concertación de las medidas de compensación.
- e) Descripción de la estrategia de intervención a ser implementada
- f) Las responsabilidades institucionales para la ejecución y los mecanismos y

procedimientos para la atención de quejas y reclamos.

g) Disposiciones sobre seguimiento y evaluación.

h) Calendario y presupuesto.

El desarrollo del censo deberá establecer la fecha de corte y establecer las características físicas de las afectaciones, proporcionará información socioeconómica actualizada de las familias afectadas, su grado de vulnerabilidad y las medidas de asistencia adecuadas a sus condiciones.

El documento de actualización deberá contar con la no objeción del Banco para su implementación.

Se adjunta en el Anexo 2 los procedimientos jurídicos y sociales a nivel detallado.

Capítulo V: Coordinación inter-institucional

Organización y coordinación inter-institucional responsable de la preparación y

ejecución del reasentamiento

Entidad			Responsabilidades
Pública	Privada	Otro	
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"			<ul style="list-style-type: none"> • Contratante para el Diseño, Construcción y Puesta en Marcha, Contratación Directa-Llave en Mano de acuerdo a especificaciones técnicas. • Aprueba el Plan de Reasentamiento y realiza tareas de inducción, seguimiento y monitoreo al equipo PR de la Empresa Contratista y la Empresa Supervisora. • Realiza trabajos de campo y gabinete relacionados con el PR incluyendo demandas interpuestas por afectados. • Aprueba carpetas de los afectados. • Fiscaliza el proceso del PR. • Cancela el monto de las indemnizaciones.
Gerencia de Desarrollo de Proyectos			<ul style="list-style-type: none"> • Da visto bueno al Informe de Estudio de Afectación emitido por la empresa contratista ejecutora del proyecto, aprobado por la supervisión y emitirá Informe Técnico de Afectación - ITA.
		Organismo Financiator BID	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisa y acompaña la ejecución del PR para el cumplimiento de la OP 710. • Otorga las No Objeciones a todos los documentos e instrumentos del PR

	Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Concluido el Estudio de Definición de Líneas-EDL, elabora el Informe de Estudio de Afectación-IEA, para la implementación y construcción de la estación, torre y áreas complementarias. • Identificará y determinará mediante documentos y planos, la ubicación y superficie de los bienes inmuebles necesarios • Contrata al equipo multidisciplinario del PR para el proceso de implementación del mismo y las correspondientes reposiciones.. • Tiene bajo su responsabilidad las partidas del PR. • Ejecuta la construcción de las reposiciones de las afectaciones correspondientes a las afectaciones físicas de acuerdo al número y tipo de reposiciones y/o reubicaciones, en coordinación con el equipo PR de la empresa de Supervisión. • La Empresa Contratista Especializada, deberá aplicar la Metodología de Avalúos
	Empresa de Supervisión	<ul style="list-style-type: none"> • Revisa y ajusta el diseño final del PR. • Contrata al equipo multidisciplinario para supervisar el PR. • Supervisa y realiza el seguimiento de la implementación del PR. • Verifica la aplicación de la Metodología de Avalúos y emitirá su aprobación respectiva. • Revisa y aprueba el Informe Técnico de Afectación Complementario emitido por la empresa contratista.

En relación a las expropiaciones se resume en el siguiente cuadro las responsabilidades de las empresas. Se añade la coordinación con los gobiernos municipales porque el Plan de Reasentamiento establece el que se debe apoyar el proceso de saneamiento del

derecho propietario de las familias afectadas que no tuviesen su documentación.

EXPROPIACIONES					
Empresas				GAM	
EETC MT	Doppelmayr	Supervisión	Fiscalización (EETC MT)	La Paz	El Alto
Estudio preliminar de los espacios a ser expropiados	Estudio final y delimitación exacta del área a ser expropiada	Revisión y aprobación	Seguimiento al proceso de avalúo y firma de minuta de transferencia	Coordinación para elaborar el certificado catastral del área expropiada	Coordinación para elaborar el certificado catastral del área expropiada

Capítulo VI: Relacionamiento comunitario

Proceso de relacionamiento y consulta con los afectados

La información hacia los actores involucrados sobre las características y los alcances de la construcción de la Línea Plateada fueron difundidos en varios eventos desde el 2016. Los impactos sociales y ambientales así como las medidas de mitigación fueron socializadas en talleres que se realizaron con las Juntas Vecinales de los Distritos 1 y 6 de la ciudad de El Alto. Se coordinó con las y los dirigentes de estas Juntas y se realizaron eventos de consulta en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Ferroviaria y dos distritos de la urbanización 16 de Julio. Esas zonas están ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto. Y en sus espacios ya se han construido estaciones y torres para las líneas Roja, Amarilla y Azul en actual funcionamiento.

Los aportes de estas consultas están relacionadas con observaciones sobre el costo del servicio, la mejora de la atención a los pasajeros, y una preocupación sobre la temática de los efectos de la violencia e inseguridad ciudadana. En los talleres se informó sobre el emplazamiento de las 21 torres así como la construcción de las estaciones conexas.

Por el número relativamente bajo de afectados por la adquisición de predios, así como por la diversidad de tipos de afectaciones, se ha considerado oportuno llevar a cabo el proceso de consulta con los afectados de forma individual. Esto se aplica a las viviendas, predios privados, casetas de Yatiris y puestos de venta afectados por la construcción de las estaciones y el emplazamiento de las torres. La relación se dio a través de reuniones en los predios familiares donde se les informó sobre sus derechos y sobre la alternativas relacionadas con la afectaciones, todo ello para generar las condiciones que lleven a ejecutar el Proyecto. En un diálogo interactivo se informó sobre las posibles afectaciones y las medidas de mitigación y compensación. El proceso de consulta continuará para finalizar y formalizar las medidas de compensación mediante documentos que tengan valor legal.

En el caso de los gremiales afectados, se ha realizado un amplio proceso de consulta desde el mes de Octubre de 2016. Los afectados conformaron una asociación para este fin: la “Asociación y bases unidas Amautas, gremiales, artesanos en defensa de nuestras fuentes de trabajo de la Av. Panorámica Sur a Coordinar con nuestras autoridades”. Se realizaron reuniones semanales de seguimiento y coordinación con EETC MT, el GAMEA y ENFE,

resultando en acuerdos sobre el proceso de reasentamiento y las medidas de mitigación. Se tienen los respaldos del proceso..

Mecanismos de atención de quejas y reclamos de los afectados

Sistema de Atención de Consultas y Reclamos del PRI

Descripción

Este mecanismo y sus procedimientos buscan responder las consultas, las quejas y dudas de los hogares afectados por la construcción y operación del Proyecto, así como los reclamos relacionados con la implementación del Plan de Reasentamiento. El mecanismo de reclamos deberá ser un mecanismo oportuno, relevante, temprano, accesible y culturalmente apropiado. Los reclamos que se refieren al PR podrán surgir principalmente de los siguientes factores:

- Desacuerdos relativos al derecho a la propiedad (herencias, divorcio).
- Desacuerdos relativos al avalúo de propiedades.
- Desacuerdos relativos a otras compensaciones y beneficios.
- Problemas relativos a la forma y al periodo de compensación.

Objetivo

Atender oportunamente los requerimientos de la población afectada y dar respuesta en plazos prudenciales a los reclamos realizados por la población.

Acciones

- Contar con oficinas de atención de Consultas, Quejas y Reclamos que brinden información y atención a la población afectada que expresa sus quejas, sugerencias, inquietudes o molestias con respecto a la ejecución de proyecto, en especial al proceso de reasentamiento.
- La Empresa Contratista y la Empresa Supervisora deberán habilitar oficinas y brindar atención los sábados y domingos, días donde la población cuenta con mayor disponibilidad de tiempo.
- Canal de comunicación y recepción: Los casos deberán recibirse a través de diversos medios, que deberán ser ampliamente difundidos: buzón de quejas y sugerencias, línea gratuita para teléfonos fijos y móviles, correo electrónico, atención directa con el personal encargado de la oficina de atención, o un mecanismo que sea apropiado a las costumbres de la zona y gratuita.
- Registro y seguimiento del caso: se debe elaborar una base de datos de los requerimientos realizados por la población, para luego ser clasificado y respondido, de ser posible con pruebas, en un tiempo prudente y con un lenguaje sencillo. Es muy importante que se responda al usuario afectado en la fecha acordada, así como la

actualización del estado del requerimiento.

- El seguimiento y control de los casos presentados podrá ser realizado por la elaboración de reportes mensuales de las quejas y reclamos registrados y atendidos, o por encuestas a la población sobre el nivel de satisfacción en el acceso de información y respuesta ante los requerimientos presentados.
- Resolución de conflictos: En caso que los afectados no estén de acuerdo con la respuesta ofrecida por parte del personal encargado, se debe abrir el diálogo, considerando los aspectos de no concordancia con el proceso del proyecto, y comunicar el proceso o gestión que se realizará al respecto.
- En caso de persistencia del desacuerdo del reclamante se podrá conformar un Comité integrado por los profesionales del área social y de conflictos de la EETC MT, la Contratista y la Empresa de Supervisión que analizará opciones que puedan dar satisfacción al reclamante.

Indicadores

- a) Registro de casos atendidos y solucionados.
- b) Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).
- c) Nivel de satisfacción de las respuestas a reclamos de la población afectada formuladas por las Oficinas de atención de Consultas y Reclamos.

Capítulo VII: Monitoreo

Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones propuestas en el PRI son necesarios para garantizar que las actividades de reasentamiento sean llevadas a cabo de manera eficiente y oportuna.

La EETC “MT”, a través de la Empresa de Supervisión será responsable de realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación del PRI y al cumplimiento de los acuerdos concertados con las familias afectadas. Se realizará seguimiento y evaluación a la mejora o al menos a la restitución de las condiciones socio-económicas de las familias afectadas durante y después de la implementación de las medidas definidas para mitigar los impactos,

para ello existirá el criterio del antes y después del reasentamiento.

El seguimiento se realizará principalmente en momentos clave:

MOMENTOS CLAVE	SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
En el momento del reasentamiento y la afectación parcial de terrenos y afectación total de viviendas con y sin derecho propietario.	<p>Se verificará el momento de inicio de los procedimientos de expropiación obras de reposición a conformidad de las familias afectadas.</p> <p>Se hará seguimiento de los procedimientos para el avalúo y la indemnización justa.</p> <p>Medidas de Asistencia Implementados para familias vulnerables.</p>	<p>Se verificará que la indemnización sea justa y que los tiempos hayan sido cumplidos</p> <p>Se realizarán visitas domiciliarias de evaluación de continuidad de la funcionalidad de la vivienda o de actividad económica de los negocios de los predios afectados.</p> <p>Se verificará las medidas de asistencia implementadas para restituir la calidad de vida de las familias.</p> <p>Se evaluará el número de planes de acompañamiento implementados a las familias vulnerables.</p>	<p>Acta de conformidad de inicio de procedimiento firmada por el o la afectada y autoridades vecinales.</p> <p>Documentos de saneamiento de familias sin documentos</p> <p>Acta de conformidad de conclusión de procedimiento firmada por el afectado.</p> <p>Fotografías del antes, durante y después del predio.</p> <p>Número y detalle de Planes de Acompañamiento</p>
Durante el reasentamiento y a la conclusión de las obras de reposición de las Casetas de los Yatiris	<p>Se hará seguimiento al proceso de reposición y/o construcción de obras de reposición.</p> <p>Medidas de Asistencia Implementados para personas vulnerables.</p>	Se verificará que la reposición y/o construcción cumpla con las especificaciones técnicas y cronograma establecido.	<p>Acta de conformidad de reposición.</p> <p>Fotografías avaladas por Supervisión.</p>
	Medidas de Asistencia implementados Planes de Acompañamiento implementados con las familias vulnerables		<p>☐ Número y detalle de Medidas de Asistencia implementadas</p> <p>☐ Número y detalle de Planes de Acompañamiento brindados</p>

Restitución de la Actividad económica de personas que utilizan predios públicos.	<p>Se verificará la restitución y continuidad de la actividad económica de las personas afectadas.</p> <p>Durante la implementación del proyecto, se verificará que los afectados que disponían de un negocio o actividad económica tienen nuevos sitios para el desarrollo de sus actividades,</p>	Se realizarán visitas domiciliarias de evaluación de continuidad de la actividad económica de los negocios afectados.	<p>Informes de Visita Domiciliaria de acompañamiento al afectado.</p> <p>Informes de evaluación social</p>
Registro de quejas y consultas durante la implementación del PR	<p>Se revisará periódicamente el libro de quejas y reclamos para verificar la atención y solución a éstos.</p> <p>Se realizarán visitas domiciliarias de verificación de atención al reclamo.</p>	<p>Se evaluará la atención y las soluciones adoptadas ante las quejas y/o reclamos.</p> <p>Se plantearán soluciones ante las dificultades.</p>	<p>Registro de los reclamos y quejas en los mecanismos establecidos.</p> <p>Respuesta de atención y solución del equipo técnico y social.</p> <p>Acta de conformidad del afectado a la solución planteada y a su cumplimiento.</p>

También se prepararán informes trimestrales acerca de la marcha y los efectos del Plan de Reasentamiento durante la fase de implementación de las opciones de compensación, y semestrales durante la fase de monitoreo de restablecimiento de niveles de vida de los afectados, este informe debe contener una información consolidada que permita obtener un panorama general de las acciones y repercusiones. Los informes de avance deben brindar información cuantitativa precisa sobre el número de personas afectadas, indemnizadas y si se hubiese presentado una reubicación. Se debe documentar el avance de la realización de los componentes de rehabilitación económica e infraestructura.. Este informe también referirá los aspectos financieros del plan e indicar los problemas o las cuestiones pendientes que hayan afectado la ejecución del PRI.

Capítulo VIII: Cronograma y presupuesto

El cronograma es el siguiente:

N. º	CONCEPTO	AÑO 1												AÑO 2							
		MES												MES							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Actividades previas																				
1	Contratación de personal para el PR por la empresa Contratista ETDB	X	X	X	X	X	X	X	X												
2	Contratación de personal para el PR por la empresa Supervisora	X	X	X	X	X	X	X	X												
3	Contratación de personal por la empresa EETC-MT	X	X	X	X	X	X	X	X												
B	Compensación por indemnización																				
1	Reunión de socialización	X	X																		
2	Identificación/Notificación			X																	
3	Avalúos/ Determinación del monto indemnizable			X	X																
4	Entrega de carpetas				X	X															
5	Pago de indemnización					X	X														
6	Seguimiento y asistencia a familias vulnerables						X	X													
C	Compensación por reposición casetas																				
1	Identificación	X																			
2	Determinación de la reposición		X																		
3	Reposición de casetas			X																	
4	Seguimiento y asistencia				X																
D	Apoyo por desplazamiento temporal																				
1	Identificación	X																			
2	Apoyo en reubicación de kiosco y puesto de venta.		X	X																	

Presupuesto

El presupuesto para la implementación del Plan se presenta a continuación:

MEDIDA DE MITIGACIÓN	Presupuesto (Bs)
Valor referencial de expropiaciones para emplazamiento de torres: Ubicación y superficie de los bienes inmuebles necesarios para el Proyecto, avalúo y determinación de monto indemnizable	3.702.649
Transferencias a título gratuito de 4 predios públicos y 1 predio privado requieren la reposición de habitaciones, depósitos, antenas: Reposición de bienes o depósitos	420.000
Afectación por torre a 2 casetas de yatiris: Compensación por lucro cesante y costo de reposición de 2 casetas	340.000
Afectación por torre a 1 kiosco y una comerciante ambulante: Gastos de traslado y lucro cesante	50.000
Afectación a una esquina de la Plaza El Niño: Reposición y equipamiento del área afectada en una jardinera de la plaza	231.000
Afectación a 7 viviendas por emplazamiento de torres en aceras: Construcción de jardineras verticales o reposición de muros	260.000
Afectación a una jardinera por contaminación visual de campanario: Intervención artística de la torre	126.000
Reubicación de 6 familias y apoyo en traslados	1.487.002
Determinación del monto indemnizable	555.397
Gastos notariales para afectaciones	10.800
Elaboración de carpetas de documentación de propiedad a favor de la EETC-MT	30.000
Seguimiento y asistencia a familias vulnerables	200.000
Determinación de opción de reposición	40.000
Transporte de 5 casetas:	40.000
Seguimiento y asistencia a las 5 casetas	250.000
Total	7.742.849
TOTAL \$US (T.C. 6,96)	1.112.478,30

Oficinas importantes
para pagar

- Luz, Agua, Gase
- Policía . FELCC
- Farmacias
- En las torres Señalización
- Señalización en el cemento
- Defensoria de la niñez
- Gendarmeria

Control de los comerciantes
Costo del pasaje un poco
mas barato (el alto hay pobreza)



Taller Socialización con JV Obreros Ferroviarios Ceja, 5 de mayo 2017

Normativa y bibliografía consultada

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ley de Expropiaciones de 30 de diciembre de 1884.
- Decreto Ley N° 12760, Código Civil de 06 de agosto de 1975.
- Ley de Registro de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.
- Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez” de 19 de julio de 2010.
- Ley N° 165 Ley General de Transporte, de 16 de agosto de 2011.
- Ley N° 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992.
- Ley N° 530 Ley del Patrimonio Cultural Boliviano de 23 de mayo de 2014.
- Ley N° 261 de 15 de julio de 2012, “De Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”.
- Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012 “Declaratoria de Necesidad y Utilidad Pública de la Expropiación de Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes Públicos para el Proyecto “Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”.
- Decreto Supremo N° 1980, de 23 de abril de 2014.
- Ley N° 630 de 15 de enero de 2015.
- Ley N° 652 de 26 de enero de 2015 “De Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase”.
- Reglamento Operativo de Expropiaciones y Transferencias de bienes inmuebles, aprobado por Resolución Administrativa N° 030/2015 de 30 de abril de 2015.
- Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por el Estado boliviano mediante Ley N° 1430 de 11 de febrero de 1993.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas , 13 de Sep. 2007.
- Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”. Metodología para determinar la Indemnización Justa de Bienes Privados Declarados de Utilidad y Necesidad Pública, Diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de transporte por cable – Teleféricos en las ciudades de La Paz y El Alto, Segunda fase, 2015,
- Arbona, J. M. (2005). Los Límites de los Margenes: organizaciones políticas locales y las jornadas de octubre de 2003 en El Alto, Bolivia. Nueva Sociedad.
- Banco Interamericano de Desarrollo, Reasentamiento Involuntario en los Proyectos del BID, Principios y Lineamientos, noviembre 1999.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2010). *Política Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo*. Washington DC: BID.
- Desarrollo, B. I. (2006). Política operativa sobre pueblos indígenas y Estrategia para el desarrollo indígena. Washington D.C.: BID.
- Banco Mundial, 2012 – Panorama General Igualdad de Género y Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano 2012, Washington DC.
- iadb. (14 de Febrero de 2013). Recuperado el 5 de Mayo de 2017, de <http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-02-14/bolivia-mejora-reordenamiento-urbano,10329.html?actionuserstats=subscribe&valcookie=>
- Kent, M. (2017). Reformulación del Programa Multifase de Reordenamiento Urbano de La Ceja, Fase I. BID.
- POUPEAU, F., 2015 – El Alto: una ficción política, Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines.
- <http://www.educa.com.bo/geografia-municipios/distrito-municipal-12-equipamiento>.

Anexos

Anexo 1: ETC MT: Medidas complementarias a la indemnización

Reconocimiento de diferentes tipo de afectaciones	Impacto y medidas de mitigación	Observaciones
Reasentamiento físico por expropiación total	<ol style="list-style-type: none"> 1) Expropiación total a persona sin derecho propietario. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Alquiler de vivienda por 6 meses</i> 2) Hijo con problemas de salud <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Se solicita intervención de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.</i> 3) Esposa con problemas de cáncer <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Se solicita intervención de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.</i> 4) Cuidadora de predio por 60 años <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>La propietaria indemnizó con un terreno por el sector y 6 mil dólares en efectivo. Gestión realizada con el Municipio de La Paz.</i> 5) No cuenta con derecho propietario. Propiedad en litigio. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Alquiler 6 meses de una vivienda.</i> 6) No contaba con vivienda, sólo era cuidadora durante 20 años. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Construcción de dos cuartos.</i> 7) Familia con necesidad de vivienda y lugar comercial. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Alquiler de vivienda por tres meses.</i> 8) Adulto mayor, problemas familiares con familia política. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Demolición de cuartos.</i> 9) Afectación a 20 casetas de Asociación de Sahumerios y Curanderos. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Reconstrucción de casetas en predios de la nueva estación.</i> 	<p>Los informes sociales muestran situaciones de pobreza, marginalidad, precariedad y distintos grados de vulnerabilidad social:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hogares a cargo de padres o madres solos/as - Personas de la tercera edad - Miembros de familia con capacidades diferentes (Física, Mental o Enfermedad crónica). - Menores de edad a cargo de dirección del hogar - Familias numerosas <p>La EETC MT no tiene un instrumento para establecer los grados de vulnerabilidad.</p> <p>Se recurre a otras instancias para apoyar a las familias, como el Ministerio de la Presidencia, o unidades de Atención del Adulto Mayor del GMALP.</p> <p>Se reconoce casos en los que las familias no tiene derecho propietario pero no se tiene información sobre sus situaciones después del pago de 6 meses de alquiler.</p> <p>No queda claro porque a una familia se le ofrece 3 meses de alquiler y a otra 6 meses.</p> <p>Se reconoce la identidad cultural y sus actividades..</p>

Reasentamiento físico por expropiación parcial	<p>1) Problemas de Préstamos Bancarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Demolición de vivienda.</i> <p>2) Familia de bajos recursos económicos, población en riesgo y necesidad de vivienda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Construcción de vivienda.</i> <p>3) Familia extensa de bajos recursos económicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pago de Impuestos</i> <p>4) Familia de bajos recursos económicos y necesidad de vivienda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Construcción de vivienda</i> <p>5) Familia de bajos recursos económicos, el dinero de expropiación fue utilizado en la devolución de anticrético.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Apoyo en la construcción de su muro medianero.</i> <p>6) Afectación a unidades productivas de un Hogar de Niñas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Reconstrucción de ambientes afectados.</i> 	<p>Se presentan las mismas situaciones de vulnerabilidad indicadas anteriormente.</p> <p>Nuevamente las medidas de mitigación son dispersas.</p> <p>No queda clara la medida de mitigación relacionada con la demolición de la vivienda.</p> <p>Al parecer no hay un tipo de vivienda que se ofrezca, depende de la situación de pobreza.</p> <p>No hay una sistematización de los casos como tampoco carpetas de afectados/as.</p> <p>No se ayuda a buscar viviendas.</p>
Desplazamiento económico	<p>1) Afectación a mujeres comerciantes en la acera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Se plantea enviar nota a la Unidad de Mercados del GMALP para la reubicación de comerciantes afectadas.</i> <p>2) Demolición de mercado afectando a 28 comerciantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Reposición del mercado en la estación.</i> 	<p>Si bien se realizan informes detallados de la situación de precariedad económica y social de las afectadas. Al parecer se resignan a la afectación y piden apoyo para su reubicación.</p> <p>No existe una política establecida para el restablecimiento de medios de subsistencia, condiciones de vida y sistemas sociales.</p>
Lucro cesante	No se encontraron casos específicos	No se tiene un instrumento para medir Lucro Cesante.
Reconocimiento de diferentes tipos de afectados	No está explicitado pero si se reconocen a propietarios con títulos de propiedad, así a los que no tienen derecho propietario.	<p>No queda clara la situación de las personas o familias que por litigios no reciben el monto indemnizable y la misma es depositada por orden judicial ante el juez.</p> <p>Se establece el procedimiento para que ejecutado el mencionado pago la Gerencia Jurídica inicie el trámite de regularización de derecho propietario a favor de la EETC-MT.</p>

Otras medidas de mitigación: efectivo, especie, asistencia	<ul style="list-style-type: none"> • Pago de impuestos • Construcción de muro medianero • Demolición • Apoyo en el traslado • Cartas a centros educativos explicando ausencias. • Cartas a responsables laborales por ausencia. • Remisión a otros servicios de apoyo estatal o municipal 	<p>El poco tiempo con el que cuentan las familias para desalojar los predios, buscar una nueva vivienda y trasladarse al nuevo lugar afecta a algunos miembros de la familia que deben dejar de trabajar o estudiar para realizar las anteriores actividades.</p> <p>No se establecen procedimientos de acuerdo al grado de vulnerabilidad.</p>
--	--	---

Elaboración propia en base a documentación social de la EETC MT.

Anexo N° 2: Procedimientos utilizados para el diseño del plan de reasentamiento

Levantamiento topográfico

Implica determinar las características físicas de los predios y mejoras que se deben realizar para la ejecución del proyecto. Esto comprende:

- Revisión de la documentación obtenida en la fase de diseño.
- Elaboración de los listados de inmuebles afectados.
- Contratación de levantamientos topográficos de los predios requeridos de acuerdo con los parámetros del estatuto de contratación.
- Divulgación e información a propietarios y residentes de los predios requeridos sobre fechas y horarios del levantamiento topográfico y sobre la documentación requerida (las fechas y horarios deben ser acordados con la comunidad).
- Elaboración de los levantamientos topográficos.
- Es recomendable que en las visitas para elaboración de levantamientos topográficos y avalúos asista un profesional social. Es indispensable la presencia del propietario del inmueble, quien deberá entregar copia de los documentos que acreditan la propiedad o tipo de tenencia. Ambas visitas deben documentarse con actas firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que se crean con derecho sobre el inmueble.
- Estudio de títulos y estado de situación de la tenencia de la tierra
- Durante la elaboración de los levantamientos topográficos se recolectarán los documentos necesarios para el estudio de títulos (escrituras, promesas de compra-venta, recibos de pago de impuesto predial, servicios públicos y demás documentos requeridos por los abogados). Se elaborará un acta de recibo de estos documentos donde conste tipo de documento entregado y fecha.

En caso de poseedores en todas sus variaciones se recurrirá al desarrollo de documentación que de constancia del estado de situación de la tenencia con base al testimonio de autoridades y otros procedimientos según los usos y costumbres de la comunidad en cuestión. Todo este proceso será minuciosamente documentado.

Esto comprende:

- Identificar a los titulares de derechos reales y generar estudios de los títulos de cada uno de los predios afectados.
- Identificar posesión con derecho a reclamación de derechos sobre la tierra y activos

- sobre ella.
- Identificar los bienes inmuebles públicos (entidades a las que pertenecen, función social).
- Identificación de situaciones jurídicas que eventualmente podrían impedir el proceso de enajenación voluntaria.
- Conciliación de la información jurídica y catastral de los predios afectados (identificación de inconsistencias en las medidas catastrales y jurídicas y solución de problemas identificados).
- Elaboración de listados de los titulares de derechos reales y de poseedores, las limitaciones y gravámenes que recaigan sobre los predios.
- Conciliación de los estudios de títulos, registros topográficos, avalúos y datos sociales de cada inmueble.
- Identificación de casos que requieren manejo especial (poseedores, usufructuarios de hecho, etc.)

Diagnóstico socioeconómico y Censo de población afectada

Esta etapa se inicia cuando los diseños definitivos están terminados y cuando se han identificado los predios afectados. Consiste en la elaboración de un censo detallado de las unidades sociales presentes en el área intervenida por las obras, con el objeto de contar con información actualizada y detallada sobre las características demográficas, económicas y sociales de los propietarios y residentes en los predios requeridos por el proyecto. Comprende las siguientes actividades:

- Cuantificar las unidades sociales de propietarios y poseedores sobre los inmuebles afectados.
- Describir y analizar las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la población que reside o realiza actividades económicas en los predios requeridos para el proyecto.
- Caracterizar los grupos de población e identificar las unidades sociales más vulnerables.
- Elaborar el censo oficial de los propietarios y poseedores de los predios requeridos por el proyecto (El formato de encuesta utilizado, debe contener un campo en el que se consigne el nombre y documento de identificación de las personas que residen y las actividades económicas que se desarrollan en cada uno de los predios). Incluye diseño de los cuestionarios por usos del predio y tenencia.
- Para la recolección de información y divulgación a propietarios y poseedores de los predios afectados. Se comunican fechas y horarios de la aplicación de la encuesta que deben ser acordados con la comunidad. Con el fin de garantizar la presencia de los afectados el día del censo, se recomienda consultar con los líderes y representantes de las organizaciones cuál es el mejor momento para programar las visitas domiciliarias de los encuestadores.
- Sistematización y análisis de la información recolectada, debe vincularse a la que aporta el levantamiento topográfico, el estudio de títulos y el avalúo para tener la información completa sobre cada predio y unidad social, elaboración de las fichas del predio y unidad social).
- Disponer de una línea base que permita identificar y evaluar las afectaciones (Elaboración de los avalúos de los bienes afectados y de las pérdidas de ingresos y renta si es el caso, conciliación y aprobación de los registros topográficos y los avalúos. Es recomendable que en las visitas de los evaluadores asista un profesional social. Es

indispensable la presencia del propietario de los bienes afectados. La visita debe documentarse con actas firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que se crean con derecho sobre el inmueble.

- Elegir dentro de las modalidades de compensación, las que mejor respondan a las necesidades de la población afectada.

Análisis Social

Para la caracterización de los afectados y su entorno social, incluyendo los niveles de vulnerabilidad se propone el Formulario Relevamiento Social de Afectados. En el mismo se hace un relevamiento de datos y avalúo socio económico familiar.

Cabe señalar que el área social establece la metodología de relacionamiento con la comunidad y los afectados y establece los criterios y parámetros que se aplicarán para determinar la existencia de condiciones de vulnerabilidad social de los/las afectados/as o la ausencia de los mismos y el grado de vulnerabilidad.

Se entiende por vulnerabilidad la característica de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto provocado por un proyecto. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la sociedad.

Se establece que una familia/persona es vulnerable cuando el o la jefe del hogar pertenece a alguno de los siguientes grupos:

- ✓ Madre sola o padre solo, son casos de familias desintegradas por viudez, divorcio u otro motivo que deja a la madre a cargo de los hijos y a su vez, como jefa de familia.
- ✓ Tercera edad, engloba a las personas mayores de 60 años que son jefes de familia y tienen a su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones.
- ✓ Menores de edad a cargo de la dirección del hogar, son casos en los cuales los padres han muerto, han migrado o simplemente no tienen la capacidad de dirigir el hogar por enfermedad o alcoholismo.
- ✓ Personas con discapacidad o enfermedad que son jefes de familia y tienen a su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones.

Adicionalmente, una familia es vulnerable cuando se trata de:

- ✓ Familia Numerosa, se refiere a las familias que tienen 5 o más hijos o dependientes, menores de edad. Se considera la mayoría de edad a partir de los 18 años, sin embargo en muchos casos, el cuartel se constituye en el paso de niños a hombres, pudiendo contraer familia o responsabilidades en la comunidad. Los hijos mayores de 18 años que se encuentran estudiando y aún dependen de la familia cuentan dentro del grupo mencionado.
- ✓ Miembros de la familia con discapacidad, en este grupo se encuentra algún miembro de la familia con alguna incapacidad física, mental o enfermedad crónica, En este caso

la familia será considerada dentro del grupo de familias vulnerables.

Grados de vulnerabilidad

La determinación del Grado de Vulnerabilidad se establece en relación a los impactos -por efectos constructivos- en una familia considerada socialmente vulnerable de acuerdo a los criterios anteriormente establecidos. El grado de vulnerabilidad identificado se considera primordial para determinar el tipo de acompañamiento que se brindará a las personas afectadas para que su situación de vida sea igual o mejor a la identificada al iniciar el Proyecto.

Relevamiento de datos y avalúo socioeconómico familiar (ficha de dampo)

Corresponde al trabajo de campo para el relevamiento de información primaria de los afectados, involucra la visita domiciliar y aplicación de la Ficha de Campo al afectado/a, para determinar información primaria respecto a las características sociales y económicas del grupo familiar.

Para una mejor referencia incluye fotografías del grupo familiar en el lugar de la afectación.

Cálculo de lucro cesante

En caso de afectación a actividades económicas o comerciales que se afectan por las actividades constructivas del Proyecto corresponde realizar la valoración y establecer la forma de compensación, por un tiempo determinado.

Previamente se deberá desarrollar un análisis de la viabilidad de reposición inmediata del negocio en un área próxima, la identificación del tiempo que demorará en instalarse nuevamente la actividad y en caso de cesación temporal de la actividad se deberá establecer la ganancia periódica que ofrece el negocio o actividad en base a la aplicación de la Planilla de Cálculo de Lucro Cesante. Se adjunta en Anexo 3) la Planilla de Cálculo para Lucro Cesante.

Sistematización del relevamiento de datos y avalúo socioeconómico familiar

En base a la información primaria relevada en campo, corresponde la sistematización de la información de la afectación en gabinete y el análisis de datos, para establecer la vulnerabilidad o no de la familia y relación con la vivienda, asimismo realiza el cruce de información con las otras áreas.

Dictamen y avalúo socioeconómico

En base a la información relevada en campo y sistematizada en gabinete, el Dictamen y avalúo justifica los resultados y define la existencia o no de vulnerabilidad de la familia afectada y el grado que corresponda, de acuerdo al tipo de afectación; asimismo determina la incidencia del factor de vulnerabilidad en el tipo de compensación definido.

En casos de alta y media vulnerabilidad, se recomienda el acompañamiento a las personas afectadas. Los casos de baja vulnerabilidad y/o sin vulnerabilidad no requieren

acompañamiento especial.

Anexo 3: Formulario para relevamiento social de afectados



Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal de Transporte por Cable y Teleférico



RELEVAMIENTO SOCIAL DE AFECTADOS

RELEVAMIENTO DATOS Y AVALÚO SOCIOECONOMICO FAMILIAR

1.- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		Fecha:							
Nombre Varón:		CODIGO:							
Nombre Mujer:		Público o Privado :							
Telf /Cel:		Ingreso Eco/Mes:							
Provincia:	Municipio:	Barrio/OTB:							
2.- DATOS DE AFECTACIÓN									
Tipo de afectación: a) Total <input type="checkbox"/> b) Parcial <input type="checkbox"/> c) Pública <input type="checkbox"/>									
Condiciones de ocupación: a) Compra Propia <input type="checkbox"/> b) Herencia <input type="checkbox"/> c) Propiedad colectiva <input type="checkbox"/>									
d) Anticresista e) Inquilino f) Cuidador g) Otro									
Paga algún tasa de impuesto: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
Existe lugar comercial en la vivienda:									
Tiene negocios en otras zona o barrios? NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Dónde?:		Lugar de su vivienda:							
3.- SITUACIÓN DEL PUESTO O NEGOCIO									
Descripción/ Estado de la casa: (Materiales, tamaños, etc.)									
4.- CARACTERIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA PERSONA AFECTADA									
No	A Nombre/Apellido	B Sexo	C Parentesco.	D Estado civil	E Edad	F Idioma	G Nivel Educación.	H Profesión/Oficio Trabajo	INGRESOS MENSUAL *
1									
2									
3									
4									

www.miteleferico.bo

Av. Manco Kapac, entre av. Republica e Ismael Vásquez (Ex ENFE), -2- 2179300

Anexo 4. Planilla de cálculo para lucro cesante.



Estado Plurinacional de Bolivia
s Empresa Estatal de Transporte por Cable * i Teleférico



BOLETA PARA LUCRO CESANTE

Fecha: _____

Afectad / @: _____

Código: _____

Progresiva Inicio: _____

Progresiva Final: _____

Departamento: _____

Municipio: _____

Barrio/OTB: _____

Antigüedad del Comercio: _____

CALCULO DEL LUCRO CESANTE									
Nº	ITEMS Venta, servicios, Nº de clientes, y otros	Actividad diaria	Actividad fin semana	Actividad toda la semana	Total Vendido	Ganancia Neta	Tiempo de la obra	Lucro Cesante	Observaciones
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS									
LITERAL TOTAL									

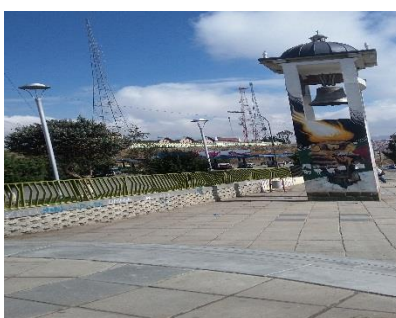
www.miteleférico.bo

Av. Manco Kapac, entre av. República e Ismael Vázquez (Ex ENFE), -2- 2179300

Anexo 5: Fotografías de algunos impactos identificados



Torre 3, zona 16 de Julio, antena radio Illimani, predio público



Torre Nro. 4 Zona: 16 de Julio "Autopista", impacto visual a campanario



Torre No. 10, Afectación temporal a gremialista en día de feria que son los jueves

Anexo 6: Resúmenes del Marco jurídico de expropiaciones de la EETC MT y de la Metodología para determinar la indemnización justa de bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública, 2015

1. Marco jurídico de expropiaciones de la EETC MT

La Expropiación es una institución de Derecho Público, constitucional y administrativo, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular, a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. La expropiación posee dos notas características: Primera, es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del Derecho Público que no puede ser asimilada a la compraventa prevista en el derecho privado; Segunda, el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, lo que la diferencia de la confiscación.

En ese entendido, la normativa aplicable a este tipo de procedimientos es la siguiente:

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ley de Expropiaciones de 30 de diciembre de 1884.
- Decreto Ley N° 12760, Código Civil de 06 de agosto de 1975.
- Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo.
- Ley N° 261 de 15 de julio de 2012, “De Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”.
- Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012 “Declaratoria de Necesidad y Utilidad Pública de la Expropiación de Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes Públicos para el Proyecto “Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”.
- Decreto Supremo N° 1980, de 23 de abril de 2014.
- Ley N° 630 de 15 de enero de 2015.
- Ley N° 652 de 26 de enero de 2015 “De Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase”.
- Reglamento Operativo de Expropiaciones y Transferencias de bienes inmuebles, aprobado por Resolución Administrativa N° 030/2015 de 30 de abril de 2015.
- Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por el Estado boliviano mediante Ley N° 1430 de 11 de febrero de 1993.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia consagra a la propiedad privada como un derecho fundamental, estableciendo en los párrafos I y II del artículo 56 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social, garantizando que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo; pero el ejercicio a la propiedad privada no es ilimitado, al contrario tiene ciertas restricciones de orden legal, en ese sentido el artículo 57 de la nombrada norma suprema establece como límite la expropiación que se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa.

Por otro lado, los numerales 11 y 26 del párrafo II del artículo 298 de la norma referida, determinan que entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado, están las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado y la expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública; conforme al procedimiento

establecido por ley.

En el sentido descrito, se constituye norma primigenia de este tipo de procedimientos, la Ley de 30 de diciembre de 1884, de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, misma que en su artículo 1, establece que dado que el derecho de propiedad es inviolable no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, a ceder o enajenar su propiedad para obras de interés público, sin la existencia de los siguientes requisitos:

1. Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecutarla;
2. Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública;
3. Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse;
4. Pago del precio de la indemnización.

Ahora bien, partiendo de la consigna que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, el artículo 7 de la mencionada Ley señala que: “Declarada la necesidad de ocupar el todo o parte de una propiedad, se justipreciará el valor de ella ...”; asimismo, el artículo 8 establece: *“El precio íntegro de la tasación se satisfará al interesado con anticipación al desahucio, o se depositará si hubiere reclamación de tercero por razón de enfiteusis, servidumbre, hipoteca, arriendo u otro cualquier gravamen que afecte la propiedad, dejando a los tribunales ordinarios la declaración de los respectivos derechos”*.

Por otro lado, el artículo 25 de la referida norma dispone que, una vez realizado el pago de la indemnización, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna autoridad o persona particular podrá obstaculizar la ejecución de la obra.

De la misma forma, el artículo 105 del Código Civil, señala que: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo.”; siguiendo la misma línea, el parágrafo I del artículo 108 estipula que: “La expropiación sólo procede con pago de una justa y previa indemnización, en los casos siguientes: 1) Por causa de utilidad pública, 2) Cuando la propiedad no cumple una función social”. El parágrafo II, señala que: “La utilidad pública y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación”.

Ahora bien, mediante Ley N° 261 de 15 de julio de 2012, artículo 4, se declara de interés del nivel central del Estado la construcción, implementación y administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y Alto.

De forma posterior, por Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, se declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles, para el Proyecto “Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”; y se establece el procedimiento aplicable.

Dentro el referido procedimiento, son aplicables los preceptos de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo, en lo referente a los plazos administrativos; es así que el artículo 33 determina cuál aquel a ser considerado para las notificaciones a los propietarios con la Resolución Ministerial, misma que se llevará a cabo

dentro de los 5 días administrativos. En cuanto a la publicación de la Resolución Ministerial a través de prensa y mediante Edicto, el artículo 34 dispone que la misma se realizará por una sola vez y en un órgano de prensa de circulación nacional.

Mediante Decreto Supremo N° 1980 de 23 de abril de 2014, se creó la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, con tipología de Empresa Estatal, carácter estratégico, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector. Por otro lado, la Disposición Final Única señala que asume competencia, derechos y obligaciones emergentes de los procesos de contratación así como de los contratos de obras, bienes, servicios generales y servicios de Consultoría suscritos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Posteriormente, en fecha 15 de enero de 2015 se promulga la Ley N° 630, cuyo parágrafo II, artículo 1, otorga a la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” la facultad de dar continuidad a los procedimientos de expropiación y regularización del derecho propietario, iniciados por el Ministerio, en el marco de la Ley Nro. 332 de 28 de diciembre de 2012. De igual forma, el parágrafo III le otorga facultades para iniciar procedimientos de expropiación hasta el pago a los titulares, ya sea de manera directa o través de la autoridad jurisdiccional, y de regularizar el derecho de propiedad a su favor.

El artículo 2 de la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015, declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de los bienes inmuebles que sean identificados como útiles y necesarios por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, para la “Construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase”; por su parte el artículo 4 dispone que en los Procedimientos de Expropiación se aplicará lo previsto por el artículo 1 de la Ley N° 261 de 15 de julio de 2012 y artículo 3 de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012. En relación a las transferencias a título gratuito, el artículo 5 instituye que se autoriza a las entidades públicas a la transferencia a título gratuito y entrega de las áreas que hayan sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el mencionado proyecto.

Para la EETC MT es destacable y valioso aporte de la Disposición Final Única de la mencionada Ley que dispone que en los procedimientos expropiatorios llevados adelante por esta Empresa: “.una vez efectuada la indemnización y solamente en caso de resistencia de la entrega del bien inmueble expropiado, por parte de los propietarios o terceros, mediante orden judicial será el Juez Civil quien disponga la entrega del inmueble con la ayuda de la fuerza pública en caso de ser necesario”.

En las expropiaciones llevadas a cabo por la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, también se observa de manera ineludible el Reglamento Operativo de Expropiaciones y Transferencias de bienes inmuebles, aprobado por Resolución Administrativa N° 030/2015 de 30 de abril de 2015, que determina el procedimiento a seguir tanto en la expropiación y la transferencia de bienes inmuebles declarados de necesidad y utilidad pública, conforme a la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015.

Finalmente, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica sobre el Derecho a la propiedad Privada determina que: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social; 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. ”

2. Resumen de la metodología para determinar la indemnización justa de bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública, 2015

a. Introducción

La valuación de muebles para la expropiación en Bolivia llevadas a cabo por el nivel central del Estado no cuenta con la normativa específica, única, universal e inequívoca que deba ser utilizada.

b. Antecedentes generales

Artículo número 57 de la Constitución Política del Estado determina que “la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada y conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión”.

Artículo 108 del código civil y la ley de expropiaciones del 30 de diciembre de 1884, constituyen la base normativa de la ley número 332 del 28 de diciembre de 2013.

El artículo tres de la ley 332 de 28 de diciembre de 2012, establece el procedimiento de expropiación de los bienes inmuebles necesarios para el proyecto referido, correspondiendo se pague el monto eternizable a favor del titular del derecho propietario, a cuyo efecto se tendrá en cuenta los avalúos presentados por el interesado y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

c. Indemnización justa

Normativa boliviana vigente:

En el Estado plurinacional de Bolivia, la iniciación justa se encuentra reconocida por la normativa vigente tanto en el nivel central del Estado como en los otros niveles.

- El artículo 57 la concesión política del Estado establece que para que proceda la expropiación debe declararse la necesidad y utilidad pública y realizarse la previa indemnización justa.
- El artículo 108 del código civil en su párrafo primero establece que la expropiación procede con pago de una justa y previa indemnización.
- El artículo 1 de la ley de expropiaciones de 30 de diciembre de 1884 reconoce que debe efectuarse el pago del precio de indemnización.
- El numeral cuatro del artículo tres de la ley N° 332 de 28 de diciembre de 2002 establece que determinado el monto de mi sable, se dispondrá el pago correspondiente.
- El párrafo I del artículo 123 de la ley N° 2028 de municipalidades de 28 de octubre de 1999 dispone que el monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles urbanos serán el valorar acordado entre partes, pues su caso, establecido

por la autoridad competente, previo avalúo para pericial.

d. Naturaleza del pago de expropiación

Expropiación no es un crédito del resarcimiento, es una carga que debe cumplir el beneficiado de la expropiación.

La indemnización expropiatoria, comprende todos perjuicios que se ocasionen por la expropiación en el patrimonio, no solamente el valor de la cosa expropiada, de modo que el patrimonio de expropiado se mantenga inalterado, sin que se produzca pérdida o enriquecimiento alguno.

La indemnización por expropiación tiene asignada de mantener el patrimonio de expropiado en el mismo estado que se encontraba antes del expropiación, en virtud del principio de igualdad ante la ley en el reparto de las cargas públicas y dado el funcionamiento de utilidad pública o interés social implícito en la expropiación.

e. Gobierno Autónomo Municipal El Alto

Se resume el procedimiento seguido por el GAMEA indicando que de acuerdo a la información otorgada por el director General asuntos jurídicos del gobierno municipal de El Alto, fotocopias del proceso de expropiación que lleva adelante el municipio, se tiene que la normativa aplicable que regula el proceso de expropiación sería la siguiente:

- a) Proyecto de la obra aprobada
- b) Informe técnico de áreas a ser expropiadas
- c) Informe catastral de registro de propiedad (emitido por la Unidad de Bienes Inmuebles) y avalúo catastral de las áreas a ser expropiadas
- d) Informen de Derecho Propietario.

En la Metodología propuesta, a partir de esta etapa hay un cambio de registro y por ello se plantea otros elementos no consignados anteriormente. A efectos de determinar el justiprecio se dispone la conformación de una Comisión mixta por cinco miembros compuesta por la Oficialía de Mayor de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, asesoría jurídica y Oficialía mayor administrativa financiera, a fin de que efectúe el avalúo de justiprecio. Esta Comisión mixta determina el avalúo del justiprecio conforme lo dispuesto por el artículo 123 de la ley de municipalidades

El avalúo catastral siempre consigna el monto de la base imponible del bien inmueble, éste fluctúa cada año no es fijo. La indemnización no versa respecto a al valor catastral, sino al valor acordado entre partes en primer instancia, es realizada en vía administrativa, en caso de renuencia, se inicia la segunda etapa llamada la judicial, llegando a pagarse lo determinado por el perito dirimidor, el cual es nombrado por el juez que conoce la causa, determinando por sentencia, superando este valor mayor al catastral.

Finalmente, no es condición de solicitud de planos aprobados, ya que el avalúo catastral incluye el lote de terreno, así como en las construcciones, por otro lado nos exige este

requisito porque su normativa no lo señala como indispensable.

f. Conclusión de indemnización justa

La propuesta metodológica concluye que la indemnización comprende una valoración de diferentes circunstancias y valores que deben ser tomados en cuenta, convergiendo los mismos para el cálculo del mismo.

También se señala que la normativa boliviana vigente se encuentra contenida en la Constitución Política del Estado que contiene valores y principios fundamentales, que contiene una visión integral de tal manera que reconoce derechos y garantías fundamentales de los bolivianos, mismos que vistos desde un punto de vista integral deben ser respetados plenamente garantizados a los administrados.. Pero es necesario aclarar que la normativa boliviana no contiene elementos relacionados con el Reasentamiento Involuntario.

Finalmente plantean que reconocer una indemnización justa no significa ir en detrimento del patrimonio del Estado, sino lograr un equilibrio entre los intereses del Estado y les respeto de los derechos y garantías de las personas, siendo totalmente legal realizar un cálculo de la indemnización que compensa hacer valoraciones técnicas que permitan arribar a un monto indemnizable que permita establecer un equilibrio entre los intereses de los actores intervinientes en un proceso de expropiación.

g. Algunos criterios para determinar la indemnización justa

1. Temporalidad
2. Catastro urbano como referente
3. Totalidad de las construcciones
4. Ubicación
5. topografía
6. Vía
7. Acceso
8. Servicios
9. Superficie
10. Depreciación
11. Ajustes de desviaciones

Anexo 7: Información complementaria sobre afectaciones

Propietarios con documentos de propiedad:

Inmueble 1: Los propietarios que son adultos no residen en la vivienda pero Si habitan la misma 3 hijos y un sobrino, informan tener piezas en alquiler. Sobre la calle hay dos tiendas y en el interior de la vivienda otro negocio. El inmueble sufrió un deslizamiento y también tiene una torre de alta tensión. Los propietarios se niegan a la expropiación parcial. No se tienen fichas de identificación socioeconómica.

Inmueble 2: Propietarios no habita el terreno pero atiende una pequeña tienda. El lugar es un garaje de vehículos y también hay un negocio de reparación de motocicletas. No se tienen fichas de identificación socioeconómica.

Poseedores e inquilinos:

Vivienda 1

Por una parte en mayo se informó de que se trata de una vivienda precaria no habitada. La afectada tiene 48 años de edad y tiene domicilio en otro inmueble. Se identificó un puesto de venta de comida (sándwiches de chorizo), que es atendida por una señora que refiere ser la empleada de aproximadamente 25 años de edad. El puesto de venta de comida, solo se apertura durante el día, quedándose la vivienda deshabitada por la noche.

Por otra parte, de acuerdo a un informe del 21 de julio pasado, la Trabajadora Social de la EETC MT informa que la jefa de hogar que está separada vive con tres de sus hijos y una nieta. Tienen el negocio de los sándwiches de chorizo y el taller de motos en los que trabaja la familia. En el informe se sugiere:

“Se sugiere otorgar a la familia de la Señora Magdalena Lanza un departamento o casa en anticrético que de preferencia cuente con un garaje por la actividad mecánica y la venta de sándwich de chorizo que tiene la familia”

La poseedora en el Acta de Conformidad señala que si no se cumple el reasentamiento demandará 2 lotes de terrenos y el pago de daños.

Vivienda 2

Los propietarios de la vivienda fallecieron y el hijo no pudo regularizar su derecho propietario quien realiza gestiones para la declaratoria de herederos, para poder demostrar su derecho propietario. La vivienda es habitada por el heredero que trabaja como transportista y 2 inquilinos. En la vivienda funcionan 2 negocios, 1 taller de autos y 1 venta de sándwiches de chorizo. El poseedor tiene un terreno en el que se puede construir el equivalente de su vivienda pero solicita que tenga un garaje por su ocupación.

En la información de mayo se consignan dos niños hijos de la pareja que alquila.

Vivienda 3

Los afectados constituyen una familia, que está compuesta por una pareja de 54 y 52 años de edad, y dos hijos mayores de edad. La actividad laboral del jefe de hogar es chofer de

transporte pesado.

En dicha vivienda tienen 2 tiendas que se alquilan, siendo una venta de misceláneos y chiflería, y la segunda tienda con la venta de huevos. Indican que ésta vivienda fue adquirida hace 4 años atrás, el cual, solamente muestra un documento privado de compra – venta.

Todos sus ahorros se invirtieron en la adquisición y construcción de esta vivienda, es un inmueble de 4 habitaciones de ladrillo, baño y cocina. Y se encuentran muy preocupados por la situación en la que se encuentran.

Sugerencia:

Se sugiere otorgarles un anticrético de una casa o departamento de 3 habitaciones y sus dependencias de preferencia en inmediaciones pues al decir de los propietarios la zona les queda cómoda para sus actividades laborales y de estudio y no desean irse a otro lado.

Vivienda 4

En mayo se informó que la vivienda se encontraba deshabitada, y en condiciones de precariedad. De acuerdo a la documentación presentada, la propietaria habría fallecido hace 12 años, la cual tuvo 4 hijos. Empero de acuerdo a un informe de julio se señala que la vivienda está habitada por dos de los herederos y 3 inquilinos.

Dos de los inquilinos su mamá los dejó en anticrético y no pudieron devolver el dinero hasta el momento, el monto asciende a los 10.000 \$us.

Se encuentran preocupados porque están conscientes que la fecha para que tengan que desocupar el domicilio se acerca pero no cuentan con otro lugar donde puedan ir a vivir y tampoco cuentan con el dinero para devolver a sus anticresistas.

Sugerencias

Se sugiere otorgarles un departamento en anticrético para que la familia pueda trasladarse y también tomar en cuenta el monto de los anticréticos que tienen que devolver y así los inquilinos puedan trasladarse a otras viviendas sin problemas.

Los propietarios indican que pretenden seguir viviendo por esa zona pues sus actividades se centran por inmediaciones

Vivienda 5

El propietario de esta vivienda tiene 64 años de edad, casado y padre de cinco hijos mayores de edad. En la casa afectada viven ambos padres con dos de sus hijos. También habitan la vivienda 3 niños de 8, 6 y 3 años de edad. La familia refiere vivir en la vivienda más de 20 años.

Sugerencias

Se sugiere otorgarles una casa en anticrético que cuente con garaje y para la hija que vive con ellos se sugiere tomar una tienda en anticrético pues ella es jefa de hogar y sus ingresos

económicos los obtiene de la venta de sándwich de chorizo.
